Desaparición forzada de William Hernando Murat Sánchez, desde la voz de su hija

María del Pilar Murat Martínez

Luis Carlos Martínez Moreno

Maestría en defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario
ante organismos, tribunales y Cortes Internacionales

Universidad Santo Tomás

Facultad de Derecho

Bogotá D.C.

2019

Desaparición forzada de William Hernando Murat Sánchez, desde la voz de su hija

María del Pilar Murat Martínez

Luis Carlos Martínez Moreno

Monografía presentada para obtener el título de Magister en defensa de los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario ante organismos, tribunales y Cortes
Internacionales

Directora trabajo de grado

Dra. Lina María Mejía Torres

Universidad Santo Tomás

Facultad de Derecho

Bogotá D.C.

2019

Resumen

En el marco del conflicto armado que ha tenido lugar en Colombia, la desaparición forzada ha hecho parte de las graves violaciones de Derechos Humanos que han rodeado esta problemática, de ahí que sea importante adelantar acciones que permitan reconstruir la historia de los diversos hechos ocurridos. El objetivo principal del presente documento es abordar desde diferentes ejes temáticos como el contexto, los hechos, el marco jurídico, el acceso a la justicia, los impactos y afrontamiento, y reparaciones, a través de la historia de María del Pilar Murat Martínez en relación con la desaparición de su padre William Hernando Murat Sánchez ocurrida en el departamento del Meta, teniendo en cuenta los diferentes aportes teóricos y conceptuales que existen en materia de Derechos Humanos.

Palabras Claves: Derechos Humanos, Conflicto Armado, Daño, Delito de Lesa Humanidad, Justicia Transicional.

Abstract

Within the framework of the armed conflict that has taken place in Colombia, the forced disappearance has been part of the serious Human Rights violations that have surrounded this problem, hence it is important to advance actions that allow us to reconstruct the history of the various events that occurred. The main objective of this document is to address from different thematic axes such as context, facts, legal framework, access to justice, impacts and facing, and reparations, the story of María del Pilar Murat Martínez in relation to the disappearance of her father William Hernando Murat Sanchez occurred in

the department of Meta, taking into account the different theoretical and conceptual contributions that exist in the field of Human Rights.

Keywords: Human Rights, Armed Conflict, Harm, Crime Against Humanity, Transitional Justice.

Tabla De Contenido

Introducción	1
Capítulo 1. Contexto	3
Capítulo 2. Hechos	12
Capítulo 3. Marco Jurídico	22
3.1. Responsabilidad Internacional de los Estados	22
3.2. La Desaparición Forzada desde el marco jurídico internacional	25
3.3. La Desaparición Forzada desde el marco jurídico nacional	29
3.4. Marco normativo internacional respecto a los patrones de macro-criminalidad y el hecho victimizante de la Desaparición Forzada	31
3.5. Marco normativo nacional respecto a los patrones de macro-criminalidad de los grupos paramilitares y el hecho victimizante de la Desaparición Forzada.....	34
3.6. La Justicia Transicional a Nivel Internacional y Nacional	36
3.7. Caso Concreto	40
Capítulo 4. Acceso A La Justicia	47
Capítulo 5. Impactos Y Afrontamientos	55
Capítulo 6. Acceso A La Reparación	72
Conclusiones	88
Referencias	91
Apéndice	98
Apéndice 1. Desaparición Forzada Del Señor William Hernando Murat Sánchez, Relato De Su Hija María Del Pilar Murat Martínez. (Transcripciones relatos)	98
Apéndice 2. Lista de siglas y abreviaturas	110
Apéndice 3. Consentimiento informado	111

Introducción

Desde la institucionalidad del sector público y privado, así como desde la academia se han adelantado acciones encaminadas a documentar las causas que originaron el conflicto armado en Colombia y las consecuencias derivadas a la población. Entre estas podemos referir los informes contruidos por el Centro de Memoria Histórica, los observatorios de derechos humanos a nivel regional, organizaciones internacionales, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y universidades a través de trabajos de investigación.

El presente proyecto de investigación, mediante el uso de la metodología utilizada por algunas comisiones de la verdad y procesos de memoria histórica, pretende conocer las causas que originaron la violación de Derechos Humanos (DDHH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el marco del conflicto armado en Colombia. De igual manera, las consecuencias que estos hechos de violencia trajeron a las víctimas y sus familiares desde las diferentes esferas relacionadas con el ser humano. De ahí que, también, sea de vital importancia identificar las medidas que ha adoptado el Estado con el fin de garantizar el adecuado restablecimiento y protección de los derechos de esta población.

La reconstrucción de hechos violatorios de DDHH y el DIH con ocasión del conflicto armado en Colombia se hace por medio de metodologías participativas que toman como principal fuente de información las voces de las víctimas, específicamente seis casos ocurridos en diferentes regiones del país. Además, se desarrolla a través de un estudio de caso, mediante la entrevista a una víctima del conflicto armado. Esto se complementa con un estado del arte que no solo permite conocer con mayor precisión las razones que ocasionaron dicha problemática y las consecuencias generadas en las víctimas a nivel

individual y social, sino también, si estas situaciones se definen como crímenes internacionales y así producir nuevos aprendizajes dirigidos tanto a la sociedad como a la academia.

Por lo tanto, esta investigación se enmarca en el paradigma cualitativo ya que busca profundizar y conocer las prácticas sociales desde los individuos y su interacción con el contexto en el que se desenvuelven. Además, tiene en cuenta las particularidades que permiten una mayor comprensión de los fenómenos sociales relacionados con la problemática del conflicto armado en Colombia. Así mismo, se tiene en cuenta el enfoque histórico hermenéutico ya que no solo busca relacionarse con el contexto sino también generar una autorreflexión sobre el proceso histórico del conflicto armado y la vulneración de derechos en la población civil.

Es así, como a partir del proceso de paz que está teniendo lugar en Colombia, los antecedentes de otros países respecto a comisiones de la verdad y la reconstrucción de la memoria histórica, resulta de gran valor este tipo de trabajo adelantado desde la academia, ya que puede convertirse en un insumo en cuanto a la metodología desde la intervención social y recolección de información, así como servir de evidencia sobre los hechos de violencia ocurridos en Colombia en el marco del conflicto armado pero desde las voces de las víctimas.

Capítulo 1. Contexto

El pueblo colombiano durante muchos años ha padecido los estragos propios de la violencia, que incluso han trascendido el carácter político del conflicto en sí mismo. Esto se evidencia a través de la afectación de sectores importantes como el económico y social. Así mismo, en los últimos tiempos el conflicto asociado con grupos armados ilegales, ha dejado de ser un riesgo únicamente atribuible a la población rural, para ahora convertirse en una fuente de preocupación de las zonas urbanas. En este sentido, se observa que el conflicto se ha diversificado de tantas maneras que ha ampliado su accionar afectando a un gran número de la población civil.

Como lo señala Robinson (2013),

La degradación del conflicto armado trae como efecto desplazamientos forzados de población civil, esto a su vez frena el crecimiento económico, político, administrativo, educativo, cultural y social en la ciudad y destrucción del medio ambiente, en detrimento de la inversión social del país, entre otras.

Puede decirse entonces que el conflicto es el problema social y económico de mayor relevancia no solo por su efecto en términos de vidas humanas, destrucción de infraestructuras y sobre costo a la actividad económica, sino por lo que representa como manifestación de rompimiento de la solidaridad, desarrollo de una cultura de desconfianza y minado continuo de las instituciones.

Con el inicio de la violencia se produjo

[...] un debilitamiento creciente de la autoridad estatal, que lleva al incumplimiento de las normas colectivas formales e informales que constituyen las instituciones. El debilitamiento

de las Instituciones propicia un recrudecimiento de la violencia, alimentada por una nueva fuente de riqueza lícita o ilícita. (Robinson, 2013)

Como se citó en Olasolo y Galain (2018, p. 64)

[...] la violencia o injusticia estructural provoca con frecuencia reacciones violentas en quienes la padecen, y contra-reacciones generalmente más violentas por parte de quienes la administran (Thomanson, 2014). Esto da lugar, con relativa frecuencia, a la aparición de conflictos armados [...] en los que la violencia provocada por las acciones armadas se desarrolla simultáneamente con la violencia o injusticia estructural que originó el conflicto (McAuliffe, 2014).

De acuerdo con la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2016), la problemática del conflicto armado en Colombia ha estado asociada a factores tales como: problemas agrarios, narcotráfico, desigualdad social, limitaciones para participación en política y poca presencia estatal en algunos sectores del territorio nacional.

Así, el mapa de la violencia relacionada con grupos al margen de la ley cobró mayor amplitud, la pugna entre estos por territorio significó el sacrificio de las condiciones esenciales de la población civil de su bienestar personal y de su referente moral, generando que sea mayor la frustración y la desesperanza, pero, sobre todo, se ha instaurado en un gran número de colombianos ese intolerable sentimiento de abandono e injusticia por parte del Estado.

La violencia en Colombia ha sido una problemática cada vez más intensa y atroz, que sacudió y trastocó el débil equilibrio social del país. Las connotaciones adquiridas en este panorama permiten percibir los estragos cada vez más irreparables en que se desenvolvió el conflicto armado, siendo posible suponer las inevitables y profundas consecuencias que

germinaron en un altísimo número de víctimas¹ entre la población civil. No obstante, para algunos, esto se ha vuelto cotidiano, simplemente se ignora o desestima debido a trillados argumentos teórico–conceptuales que no dejan reconocer el ámbito real de la violencia, al asociarla con situaciones inevitables o fatales de la condición humana (CERCAPAZ, 2012).

Para Gutiérrez (como se citó en Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2016), [...] uno de los factores que explica la prolongación del conflicto armado en Colombia ha sido la asimilación de destrezas o el reclutamiento de personas experimentadas de los ciclos de violencia anteriores, por parte de nuevos o renovados actores armados. En los inicios del Frente Nacional, se trataba de personas o comunidades rurales que habían adquirido habilidades para la guerra o capacidad de organización para la resistencia frente a adversarios armados, gracias a experiencias sobre el terreno y no a través de manuales provenientes de la Unión Soviética, China o Vietnam. Esta dinámica tuvo lugar tanto en los años sesentas cuando emergieron las guerrillas de primera generación, como en los años ochenta cuando se recompusieron las FARC², el EPL³ y el ELN⁴ y nacieron las guerrillas de “segunda generación”. La asimilación de destrezas adquiridas por hombres en armas en distintos momentos será determinante para desentrañar cómo la violencia produce dinámicas propias que la perpetúan. Incluso, como veremos, líderes de bandas criminales como el Clan Úsuga, adquirieron sus destrezas siendo antes miembros de grupos guerrilleros. (p. 24)

En este panorama, Colombia ha sido considerado uno de los países con más alto grado de vulneración a los Derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, con altos

¹ La Ley 1448 de 2011 establece el concepto de Víctimas así:

Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. (art. 3)

² Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

³ Ejército Popular de Liberación

⁴ Ejército de Liberación Nacional

niveles de pobreza y alta insatisfacción de las necesidades básicas, es en suma, un país social, político y económicamente tradicional, subordinado y con una cultura dependiente, ya que no ha podido superar las ataduras coloniales establecidas en torno a países económicamente fuertes.

Por su parte, Pizarro, como se citó en Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2016), hace referencia a algunos hechos históricos que pueden contribuir al entendimiento del conflicto armado en Colombia, destacando los siguientes: la “[...] Guerra de los mil días (1899–1902), (en la que se dieron) episódicos hechos de violencia, (como la Masacre de las Bananeras o las víctimas de la violencia sectaria tras el fin de la hegemonía conservadora)”. A finales de los años 40, la tasa de homicidios subió en el país a diez por cien mil habitantes, y el Bipartidismo promovía el sectarismo excluyente. Así mismo hubo un “[...] fracaso de los “terceros partidos” (tales como el PAN⁵ y el UNIR⁶)”, al igual que el partido comunista, los cuales surgieron durante el cambio de hegemonía política de 1930, e hicieron parte del partido liberal. En 1934, 1938 y 1942, la abstención del partido conservador en las contiendas electorales, lo cual hizo posible los triunfos del partido liberal. De acuerdo con Berry:

Colombia se ha caracterizado por una extrema desigualdad en la distribución del acceso a la tierra agrícola y una grave ambigüedad en torno a los derechos de propiedad. Estos problemas han contribuido a [...] las oleadas de violencia que recorrieron periódicamente al país durante el siglo XX y parte del siglo XIX.

En 1946, el partido conservador triunfó en las elecciones y “[...] despertó de nuevo el sectarismo ciego en muchas zonas rurales. Entre 1946 y 1948 ya se contabilizaban millares

⁵ Partido de Acción Nacional (PAN)

⁶ Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria

de víctimas.” Otro hecho importante fue el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán⁷ que se dio el 9 de abril de 1948. Con este, se intensificaron los hechos de violencia y “[...] las instituciones estatales sufrieron lo que Paul Oquist denominó “un colapso parcial del Estado”. Desde entonces, la muerte de Gaitán ha sido percibida en el imaginario colectivo nacional como un [...] antes y un después” en la historia del país.

Así mismo, Pécaut, como se citó en Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2016), subraya, que el conflicto armado en Colombia es multi-causal y su origen y persistencia en el tiempo han de ser analizados “[...] como una dimensión y expresión de un conflicto más profundo que es el conflicto social, producto del modelo económico-político de sociedad excluyente y estructuralmente violenta que está vigente” (Giraldo Moreno, p. 41).

La profundización en las formas de concentración del poder, el fracaso de la reforma agraria y las acciones sistemáticas encaminadas hacia la exclusión y señalamiento de la población campesina bajo la estrategia de “contrainsurgencia” constituyeron el caldo de cultivo que dio forma a los grupos guerrilleros más antiguos del país (FARC-EP, ELN y EPL), cuyo nacimiento en la década de 1960 no fue espontáneo, sino consecuencia de las vicisitudes históricas de los movimientos campesinos y las repúblicas independientes establecidas en las zonas marginales del país donde la presencia del Estado era nula. Estos grupos constituyeron, según Molano (como se citó en Comisión Histórica del Conflicto y

⁷ El asesinato en 1948 de Jorge Eliécer Gaitán, líder visible del movimiento por la reforma agraria, constituye un momento central en la historia política de la nación, porque consolida la lucha armada como mecanismo de reivindicación social de las comunidades campesinas (Ver: Estrada, 2015, p. 9; Fajardo, 2015, p. 30). La inestabilidad política que se generó durante el subsiguiente periodo conocido como “La violencia” llevó a los partidos políticos tradicionales (Liberal y Conservador) a acordar el gobierno militar del General Gustavo Rojas Pinilla (1954-1957) con el fin de recuperar la legitimidad y seguridad política en el país. Seguido durante un periodo de casi veinte años por el denominado “Frente Nacional” (1958-1974), periodo histórico en donde dichos partidos políticos acordaron alternarse la presidencia y los distintos cargo del Estado (Ver: Pécaut, 2015, p. 18) como estrategia de control político y económico de la nación (Olasolo, H & Galain, P, 2018, p. 71).

sus Víctimas, 2016, p. 50) el mecanismo de defensa de estas comunidades hasta la década de 1980, favoreciendo su representación y participación política⁸.

Por otro lado, el Centro de Memoria Histórica (2013) hace referencia a que, en el marco del desarrollo de la guerra en el país, el paramilitarismo fue una estrategia de defensa generada por el Estado colombiano ante la amenaza de las guerrillas. Desde sus inicios, esta se ha caracterizado por ser una organización armada diseñada para contrarrestar los efectos de la “insurgencia”, que ha disfrutado de la aprobación de las élites nacionales y ha contado con cobertura legal. Las consecuencias de su actuación, con frecuencia en colaboración con las Fuerzas Armadas, se pueden observar en distintas masacres, secuestros, extorsiones y persecuciones ejecutadas contra la población civil. (p. 158)

Los autores que han recopilado los inicios y causas del conflicto armado en Colombia han señalado de manera unánime, que desde los años 60, los gobiernos de turno han utilizado como estrategia contrainsurgente, a civiles armados, dando lugar al origen de grupos paramilitares⁹, los cuales inicialmente contaban con un marco jurídico que permitió su evolución, crecimiento y desarrollo desde la legalidad de Colombia.

Es así, como en 1965 el gobierno de turno adoptó el Decreto 3398, que se convirtió en legislación permanente a través de la Ley 48 de 1968. Como explica el informe de la Alta

⁸ Para ampliar información ver: Estrada, 2015, p. 28; Pécaut, 2015, p. 24, como se citó en Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2016, p. 24)

⁹ El surgimiento del paramilitarismo data de 1962 con la llegada de la Misión Yarborough al país. Los Estados Unidos sugieren al gobierno colombiano crear grupos mixtos entre civiles y militares para preservar la seguridad nacional. El gobierno de Virgilio Barco suprimió su piso legal, no obstante, ante el escaso pie de fuerza del Ejército y la amenaza de una desestabilización de la seguridad, los gobiernos de Gaviria y Samper les otorgaron estatuto de legalidad. Ejemplo de ello son las Asociaciones Campesinas de Vigilancia Rural “CONVIVIR”. La Corte Constitucional en 1997, a través de la inexequibilidad del Decreto que les daba marco legal para el uso de armas largas y labores de inteligencia, llevó a que estos grupos transitaran hacia la ilegalidad. Finalmente, su desmovilización durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez les dará un marco de impunidad y legalidad a sus acciones a través de la Ley 782 de 2002 y 975 de 2005. (Fernández Vacas, 2015, p. 145)

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia (1998), a través de dicha normativa

[...] se dio fundamento legal para la organización y promoción de grupos civiles armados, denominados autodefensas campesinas. Dentro de este marco, miembros de las fuerzas armadas dotaron de armamento, entrenaron y prestaron apoyo logístico a estos grupos para apoyar a la fuerza pública en zonas de conflicto (párr. 86)

De ahí que grupos armados ilegales y delincuenciales hayan sido capaces de establecer sus estructuras, haciendo uso indiscriminado de la violencia, siempre apoyados en la corrupción y en la clientela política, pero, sobre todo, en el abandono y aislamiento al que han sido sometidas diferentes regiones del país. En este sentido, la marginación ha sido tal que las estadísticas en materia de vulneración de derechos humanos son altamente desfavorables.

Durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana, entre 1998 y 2002, se llevaron a cabo negociaciones con las FARC, en las que se estableció una zona de distensión que incluyó cuatro municipios del departamento del Meta: Uribe, Mesetas, La Macarena y Vistahermosa. Sin embargo, dicha zona no cumplió su principal propósito, sino que se destinó para el fortalecimiento de las FARC, quienes utilizaron el área como base para planear sus estrategias militares, llegando incluso a atacar poblaciones aledañas como Puerto Lleras y Puerto Rico. Estas acciones tuvieron respuesta por parte del Estado, a través de la intensificación de la presión militar en el departamento, lo que llevó a fuertes tensiones que obligaron al gobierno a levantar la zona, en febrero de 2002, e iniciar la retoma del control territorial (Gobernación del Meta, 2012-2015).

El área de paz, desarrollo y reconciliación, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010) refiere que entre las causas asociadas al conflicto se destacan condiciones sociales y económicas relacionadas con altos índices de marginalidad y pobreza, la presencia de cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, situaciones que tienen estrecha relación con la presencia de grupos armados ilegales, la poca presencia estatal y el alto índice de necesidades básicas insatisfechas. Menciona además que en el departamento del Meta se reconocen tres grandes subregiones:

Piedemonte: está integrada por los municipios de Restrepo, Cumaral, El Calvario, San Juanito, Acacías, Guamal, Castilla la Nueva, San Carlos de Guarda, Cabuyaro, Barranca de Upía, Puerto López y Mapiripán.

Ariari-Guayabero: conformada por los municipios de El Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granada, La Macarena, Uribe, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama, San Luis de Cubarral, Mesetas y Vistahermosa.

El eje Puerto Gaitán-San Martín-Villavicencio, subregión ubicada en los márgenes del río Meta (PNUD, 2010).

El programa agrega que buena parte de esta región de frontera agrícola y de economía campesina, carente de servicios públicos y sociales, de infraestructura de producción y de comunicaciones y sin posibilidades de acceso al crédito, encontró en los cultivos ilícitos una forma de obtener ingresos y sobrevivir. Pese a esta economía ilícita, se ha mantenido la base cultural, social y económica campesina, aunque este sector sigue reclamando del Estado opciones de desarrollo para la sustitución de sus cultivos de hoja de coca (PNUD, 2010).

Finalmente, teniendo en cuenta lo referido anteriormente, y para el caso en concreto, es necesario definir el contexto de ocurrencia del hecho sobre el que se basa esta

investigación. El Meta es un departamento de Colombia, ubicado en la región centro oriente del país que cuenta con una superficie de 85.635 km², lo que representa el 7,5 por ciento del territorio nacional. Posee una posición geográfica estratégica, limita al norte con el departamento de Cundinamarca y los ríos Upía y Meta, que lo separan del departamento del Casanare; por el oriente, con el departamento del Vichada; al sur con el departamento de Caquetá y el río Guaviare, que lo separa del departamento de Guaviare y, por el occidente con los departamentos de Huila y Cundinamarca (Gobernación del Meta, 2016, p. 10). El departamento está dividido en 29 municipios¹⁰, y su capital es Villavicencio.

De acuerdo con lo referido por la Secretaría de víctimas, derechos humanos y paz, el surgimiento de la problemática del conflicto armado en el Meta está asociado, entre otros factores, a dinámicas migratorias que tuvieron lugar en la región entre los años 1955 y 1964, relacionadas con la siembra de cultivos de uso ilícito. Dichas migraciones trasladaron también conflictos externos que tenían que ver con luchas ideológicas sobre el uso y tenencia de la tierra, dando lugar al traspaso de conflictos armados entre bandos o familias, como rezagos de la violencia partidista de mitad del siglo XX. En este panorama surgen las primeras expresiones armadas que dieron origen a la creación de las FARC y, tras ellas, las respuestas estatales e ilegales que buscan contrarrestar su acción y dominio en la región. (Gobernación del Meta, 2016, p. 12)

¹⁰ Municipios del departamento del Meta: Villavicencio, Acacías, Barranca de Upía, Cabuyaro, Castilla La Nueva, Cubarral, Cumaral, El Calvario, El Castillo, El Dorado, Fuentedeoro, Granada, Guamal, La Macarena, La Uribe, Lejanías, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto López, Puerto Lleras, Puerto Rico, Restrepo, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, San Juanito, San Martín, Vista Hermosa.

Capítulo 2. Hechos

Con el fin de tener una mayor comprensión de los efectos que desencadenaron a nivel individual, familiar y comunitario, las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado interno, se tomará como principal fuente de información el relato de María del Pilar Murat Martínez acerca de la desaparición forzada de su padre, el señor William Hernando Murat Sánchez. Estos hechos ocurrieron en el municipio de Cabuyaro, departamento del Meta en Colombia. A partir de ello, se pretende realizar un análisis del relato desde diferentes ejes temáticos propuestos en el documento, y a la luz de los distintos pronunciamientos normativos, jurisprudenciales y doctrinales aplicables al caso concreto.

En el departamento del Meta existió una presencia histórica de la guerrilla de las FARC, sin embargo, en la década de los noventa, se empezó a evidenciar la presencia de grupos paramilitares, y fue con las masacres de Mapiripán, ocurrida en 1997, y la de Puerto Alvira, en 1998, que las autodefensas iniciaron una arremetida contra las FARC, con un alto impacto en la población civil. Así lo reafirma la Vicepresidencia de la República (2008):

El Bloque Centauros tuvo presencia prácticamente en todo el departamento del Meta, con la imposición de un régimen de terror que se tradujo en una serie de asesinatos selectivos, cobros de vacunas, expropiación de tierras y señalamiento a personas de ser guerrilleros, principalmente en el Piedemonte, en el Ariari, en el área de Mapiripán y en la región Oriental (p. 3)

Mi nombre es María del Pilar Murat Martínez, mi padre es William Hernando Murat Sánchez uno de los muchos desaparecidos en Cabuyaro (Meta), mi padre fue solicitado por alias Gato en la finca La Embajada, el 29 de julio del año 2001, la citación le fue transmitida por Jaime

Albarracín era un simple vendedor de pescado del sector, usando simplemente: “dígame al del carrito azul que se acerque a la embajada que ya hablamos con él es para un expreso que no falte”. Jaime ya sabía que gato era un miembro de las AUC, por lo tanto, él se acercó a mi padre con miedo, ellos nunca tuvieron problemas ni nada, pero si eran vecinos, conocidos, entre veredas, es muy pequeño (el municipio). (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018).

El municipio de Cabuyaro se encuentra localizado a orillas del río Meta y está conformado por 16 Calles y 9 Carreras. En materia de educación posee excelentes instalaciones de un internado en la Institución Educativa de Cabuyaro que aloja aproximadamente 120 niños del área rural. Una de sus veredas es la Remanzón, conocida culturalmente como la Vereda Embajada, allí se encuentra también una institución educativa que llega al nivel de primaria (Municipio, s.f).

Mi papá no tenía dinero para el aerocarpatí que manejaba ni para hacer los expresos, entonces a las 8 a.m. él cogió la bicicleta, una bicicleta vino tinto y cogió rumbo hacia La Embajada, lo último que dijo a la esposa fue, el que nada debe nada teme, y pues que, si no iba, lo iban a ir a sacar a la casa. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018).

En la región, la estructura del soporte económico está a cargo de la agricultura tradicional y tecnificada con cultivos de arroz, soya, algodón, maíz, plátano, yuca, palma africana y árboles frutales. El inventario ganadero de su jurisdicción se aproxima a las 40.000 cabezas de ganado. En este municipio otra actividad importante es la pesca. El 27% de la población urbana se dedica a dicha actividad, que se practica de manera artesanal. El municipio de Cabuyaro limita al Norte con el municipio de Barranca de Upía, al sur con el Municipio de Puerto López y Cumaral, al oriente con el departamento del Casanare y al occidente con el departamento de Cundinamarca (Municipio, s.f).

El tráfico de estupefacientes trajo detrás de sí a grupos de justicia privada que al llegar al Meta lograban varios objetivos. Por un lado, llevar su esquema antissubversivo del norte de Colombia al sur del país y exactamente a uno de los llamados santuarios de las FARC. Y por otro, entrar en el lucrativo negocio de la hoja de coca. Así, la presencia paramilitar se convirtió en un factor determinante en la evolución del conflicto y la configuración de los poderes políticos y económicos regionales. De acuerdo con el texto *Nacionalización del Paramilitarismo en la Zona Séptima*, en la década de los 80,

[...] desde Puerto López y Puerto Gaitán sobre el río Meta, se afianzó una estructura de seguridad con el uso de ejércitos privados sostenidos por inversionistas legales y narco hacendados. También se consolidó este modelo en la zona de influencia de los municipios de San Martín y El Dorado, en el Meta. Gonzalo Rodríguez Gacha y Víctor Carranza Niño fueron quienes impulsaron este recorrido paramilitar y más tarde los narcotraficantes del Cartel de Cali y Leónidas Vargas (s.f).

Cuando él llegó allá lo tildaron de auxiliador de la guerrilla, cosa que no es cierta, puesto que mi papá a duras penas los había visto una vez y fue porque los transportó en una sola ocasión, sin embargo, a mi papá, por cosas que yo deduzco viendo el expediente, lo tenían vigilado, no se sabe por qué motivos, porque Gato estaba siempre en un mismo lado a la misma hora, y mi papá lo alcanzó a ver en algunas ocasiones al igual que Jaime. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018).

En la década de los noventa, desde 1997, se manifiesta en la región la presencia de los paramilitares de Córdoba y Urabá. Diversos grupos de justicia privada llegaron al Meta. Por un lado, las Autodefensas Campesinas del Casanare, que hicieron presencia en el nororiente del departamento, lideradas por Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos. Y por otro, las Autodefensas de Meta y Vichada, al mando de alias Guillermo Torres, quienes

estaban en Cesar, Santander, Cundinamarca y Boyacá y se expandieron hacia algunas zonas cocaleras del alto Ariari en el Meta y Vichada. Y, además, el bloque Centauros –liderado por Miguel Arroyave– articulado a las AUC.

Después llegaron, estaba Pollo y alias Jimmy quien confesó en el 2011 el crimen, confesó que con un calibre 38 le dio el disparo de gracia a mi papá, cuentan también que Pollo le dijo a Jimmy que lo picara, pero no, Jimmy dijo que no fue capaz, llegaron otros que no recuerdo sus alias, llegaron otros dos armaron un hueco y lo enterraron, justo ahí donde lo mataron lo enterraron. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018).

En sentencia en contra de los desmovilizados postulados del Bloque Centauros y Bloque Héroes del Llano, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2016, párr. 735), se estableció que las fuentes de financiación de dichos bloques provenían de exigencias económicas a los sectores agrícola, ganadero, comercio, transporte y tráfico de estupefacientes en sus diversos eslabones. Lo anterior, se sustenta en lo informado a la Fiscalía por Orosman Ostén Blanco, quien manifestó que el comercio de Barranca de Upía, Cabuyaro, Cumaral, Restrepo y Medina, sobre todo supermercados y almacenes, distribuidores de cerveza, licores, discotecas, cantinas, hoteles, restaurantes y bombas de gasolina, todos “pagaban cuota”. A los comerciantes les cobraban el 5 por ciento sobre ventas, se hacía un balance de lo que podían vender al año y con base en eso se cobraba, daban 200 a 500 mil pesos y máximo un millón anual. En todos los pueblos se reunía a los comerciantes más grandes y se les exigía cuota (párr. 752).

Después de que mi papá llegó allá, mi tía Ayde y mi abuela Teresa se fueron a indagar sobre el paradero de mi padre ya que habían pasado dos días y no se sabía nada, en cuanto fueron a indagar se dieron cuenta que, le contaron a mi tía que a mi padre lo tuvieron ahí en la finca La embajada y posteriormente, lo llevaron a la escuela La embajada que queda más o menos

a 8 km de la finca donde ella estaba, allá lo tuvieron y lo pusieron atrás, lo dejaron atrás de la finca como por cinco horas más o menos. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018).

En la referida Sentencia (2016) se estableció que el Frente Pedro Pablo González tenía influencia en los municipios de Barranca de Upía, Restrepo y Cumaral en el Meta, y dentro de sus formas de actuar estaba el establecer alianzas con la fuerza pública en las regiones de influencia, para lo cual se reunían con los comandantes de policía y acordaban pagar sumas de dinero a miembros de las Fuerzas Armadas, y desaparecer los cuerpos para no dejar rastros de los delitos. El móvil que aducía el frente era combatir a todos los señalados de ser auxiliares, colaboradores, informantes o simpatizantes de la guerrilla. Por ello, su accionar consistía en ubicar a los ciudadanos, retenerlos, transportarlos a otros lugares donde les daban muerte y desaparecían sus cuerpos (párr. 976).

La búsqueda de mis abuelos, de mi abuela y mi tía indagando, se fueron a Barranca de Upía y buscaron a personas que conocían a mi padre y les preguntaron si en algún momento se habían topado durante ese tiempo que él estaba perdido. Descubrieron también que había un restaurante que queda cruzando de Barranca de Upía a la vereda La Embajada, donde decían que siempre se reunían los paramilitares, cuando se enteran de eso, ellas que están dispuestas a todo por ir a buscar a los victimarios y que cuentan que pasó. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018)

La Secretaría de víctimas, derechos humanos y paz de la Gobernación del Meta (2016, p. 12) hace referencia a que, en el 2000, las estructuras paramilitares de la región consolidan su poder con dineros del tráfico de drogas, al punto de negociarse franquicias con capos del narcotráfico. Es así como el “Bloque Centauros” pasa a manos de Miguel Arroyave y Daniel Rendón, quienes continúan con sus actividades delictivas hasta el 2004,

cuando el primero es asesinado por sus hombres y es reemplazado en el mando por “Jorge Pirata” y alias “Cuchillo”.

Mi tía y mi abuela siempre pidieron ayuda a las autoridades y siempre les negaron, en Cabuyaro les negaron el acompañamiento que, porque era muy peligroso y que ellos no iban, luego cuando se enteraron de que en Barranca de Upía estaba el restaurante, la escuela y eso, ellas quisieron ir a indagar también, y también les negaron el acompañamiento diciéndoles que ellos no iban por allá porque levantaban el avispero que era muy peligroso. Sin embargo, mi tía y mi abuela les respondieron que iban a ir, que iban a ir solas y que en caso de que no vayan a aparecer y que no se supiera más de ellas que fueran allá porque ellas iban a estar allá. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018)

Entre 2003 y 2004 tiene lugar la confrontación armada más sangrienta en los Llanos Orientales, el enfrentamiento entre las Autodefensas Campesinas de Casanare y el “Bloque Centauros”. Esta dio lugar a innumerables afectaciones a civiles y a miembros de esas estructuras, entre las que se registran homicidios, desplazamientos forzados, ataques a bienes civiles, violencia sexual, desaparición forzada, así como el incremento exponencial en los fenómenos criminales del despojo de tierras con el fin de consolidar la expansión territorial y la hegemonía del negocio de la coca para el Bloque Centauros.

Según lo que he leído, en el año 2000, un año antes de desaparecer mi padre, los grupos empezaron a meterse, no solo en pequeñas partes del pueblo, sino que arrancaban tierras de la gente, despojaban a la gente de sus tierras y después, justamente como a mediados del 2000 empezaron a desaparecer gente, muchos allá iban engañados con promesas de trabajo, digamos que ese el modus operandi en ese tiempo, engañarlos de esa forma. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018).

En el año 2005 y posterior a la firma del acuerdo de Ralito y la expedición de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, se da lugar a la desmovilización de los miembros de los

grupos de autodefensas que operaban en el país. Es así como tienen lugar las desmovilizaciones de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, continuando con el “Bloque Centauros” y finalizando, en abril de 2006, con la desmovilización de los bloques “Héroes del Llano” y Guaviare.

Yo estaba pequeñita, yo tenía cuatro años cuando todo esto ocurrió, vivíamos allá, digamos que la familia se desintegró, se desconformó, unos vinimos a Bogotá y otros están allá, mis hermanos paternos siguen allá, en cambio mi mamá y nosotras nos vinimos para acá (Bogotá). Después de eso, como al año después más o menos, porque sin embargo mi mamá quedó muy sola, desde mi papá mi mamá nunca quiso conocer a otra persona, una mujer muy guerrera mi mamá, a falta de oportunidades, sin embargo, no fue como un bloqueo al progreso que logró darnos a cada una. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018).

La Ley 975 o Ley de Justicia y Paz, desde su planteamiento inicial apareja la importancia de un proceso de negociación para la reincorporación de miembros de grupos armados ilegales con el deber de garantizar los derechos de las víctimas a la Verdad, Justicia y Reparación. En este sentido, la Ley realiza planteamientos que vienen acompañados por un catálogo de conceptos, los cuales definen de manera puntual los parámetros a considerar sobre el tema de víctimas, derechos y el proceso de desmovilización. Sobre este último, establece los requisitos tanto individuales como colectivos necesarios para que esto se materialice dentro del marco normativo.

En el lugar donde tenían a mi padre estaba Pollo y alias Jimmy quien confesó en el 2011 el crimen, confesó que con un calibre 38 le dio el disparo de gracia a mi papá, cuentan también que Pollo le dijo a Jimmy que lo picara, pero no, Jimmy dijo que no fue capaz, llegaron otros que no recuerdo sus alias, llegaron otros dos armaron un hueco y lo

enterraron, justo ahí donde lo mataron lo enterraron. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018).

Cabe mencionar entonces que, en este tipo de procesos, la investigación de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado interno está dirigida a juzgar a los máximos responsables, con el fin de exhibir la estructura del grupo armado, el modus operandi, y las relaciones que hicieron posible su operación. Siendo necesario referirse al concepto de macrocriminalidad, acuñado por la Corte Suprema de Justicia (2015),

entendida como fenómeno que trasciende el ámbito de la empresa criminal para incursionar en un aparato delincuencial organizado y jerarquizado, orientado a desarrollar múltiples frentes delictivos dentro de una amplia cobertura geográfica, no puede ser investigada en forma tradicional como si se tratara de una gran cantidad de hechos aislados.

En Justicia y Paz solo está José Ernesto, alias Jimmy, él declaró los hechos y se acogió a la sentencia anticipada, él ya cumplió su condena, ahorita yo quisiera como buscarlo. He preguntado en la fiscalía, pero no he conseguido el contacto, creo que es mi objetivo, alias Jimmy está libre en este momento, el que dio la orden no se acogió a Justicia y Paz, pero creo que está en una cárcel del Tolima, pero no lo tengo claro. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018).

Se observa entonces, desde esta perspectiva una enorme limitante dentro del proceso entablado a través de la Ley de Justicia y Paz, ya que uno de los derechos que se busca garantizar es el derecho a la verdad, el cual, con medidas como la mencionada, trastocan de manera definitiva el proceso en su conjunto.

Mi papá tuvo dos relaciones libres, sin embargo, no fueron dos relaciones al tiempo, primero fue la relación con la señora con la cual tuvieron tres hijos y después con mi mamá donde nacimos tres chicas, allá son dos chicas y un varón, y acá tres chicas. Mi papá vivía con

nosotras cuando ocurrieron los hechos [...]. Mi mamá estaba un poco enferma, no actuó tanto referente a la búsqueda de mi padre, también hay conflictos familiares que surgieron referente al nacimiento de nosotras es como que mis abuelos dudaban que él fuera nuestro padre, nos catalogaban como las bastardas, entonces eso si complicó por lo tanto las cosas, y mi mamá estuvo alejada de la búsqueda, sin embargo, [...] cada quien sabe cómo es su dolor y de qué forma puede expresar su dolor. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018).

Con respecto al derecho a la verdad y su conexidad con el derecho a la Justicia, en los pronunciamientos judiciales en el marco del proceso de justicia transicional, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (2016) indicó que

los intentos por reconstruir la verdad de lo ocurrido con los Bloques paramilitares en diversas regiones del país son documentos inacabados, sujetos a mejorarse, rehacerse y perfeccionarse. La verdad y las construcciones sobre el pasado nunca serán verdades absolutas y declaradas, serán reconstrucciones que pueden enriquecerse a partir de más fuentes u otros enfoques de análisis, de tal suerte que la historia y su investigación siempre será perfectible.

De ahí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2017) recuerde que el establecimiento de la verdad judicial debe también construirse mediante el análisis que puedan efectuar los tribunales internos a través de ese y otros medios probatorios a que haya lugar (p. 64).

Una vez hubo una prospección en base a la declaración dada por alias Jimmy, pero se hallaron otros cuerpos, de una señora y un señor, sin embargo, no eran los de mi padre. Las autoridades muy negligentes en ese sentido porque siempre la excusa es que no hay recursos para llevar al victimario para que indique, que el terreno que ta ta ta, eso fue hace cuatro años, pero no hay ningún resultado, el caso está inhibitorio. Llevo dos semanas trabajando con mi abogado, estamos trabajando en una demanda para que nos den

resultados para ver que han hecho, en principio el poder lo tenían mis abuelos, pero ellos murieron, hasta ahí no se había hecho nada, yo firmé poder hace poco esperando que sea algo fructuoso. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018).

Se hace evidente entonces, que entre los elementos fundamentales para el cumplimiento de los propósitos de la Ley, se encuentra el brindar a las víctimas espacios idóneos y adecuados que permitan garantizar el acceso a los derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral, no solo como mandatos legales a nivel interno, sino también en concordancia con las disposiciones internacionales en materia de protección y garantía de los Derechos Humanos, los cuales para el caso concreto no se evidencian, ni se alcanzan a percibir por parte de las víctimas.

Se ha establecido que la desaparición forzada es un delito continuado teniendo en cuenta que, al no tener certeza sobre lo ocurrido con la víctima del hecho, la vulneración de derechos se mantiene vigente. Además, afecta el derecho a la vida digna, a la libertad, a la locomoción, a la libre expresión y genera un riesgo inminente en el derecho a la vida y a la salud, ya que en la mayoría de los casos de desaparición forzada las personas son víctimas de torturas físicas y psicológicas, al igual que son sometidas a tratos degradantes e indignos. Es por esta razón que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que la desaparición forzada es un delito de ejecución permanente, ya que su consumación se prolonga en el tiempo. (Corte IDH, s.f)

Capítulo 3. Marco Jurídico

A continuación, se presentará un análisis que toma como fundamento los hechos narrados por Pilar Murat Martínez, con respecto a la desaparición forzada de su padre, así como el marco jurídico internacional y nacional, a partir de lo cual se pretende precisar si los elementos que rodearon la ocurrencia de los hechos se constituyen o no como crímenes internacionales y la posible responsabilidad del Estado por dichos sucesos. De igual manera, se tienen en cuenta los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales que tienen estrecha relación con la línea de investigación.

3.1. Responsabilidad Internacional de los Estados

La Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución AG/56/83 definió la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, estableciendo aquellos elementos que lo configuran, así como los deberes que deben cumplir los Estados en relación con el Derecho Internacional. Frente a esto se han construido, por diferentes tratadistas, algunos conceptos:

Un Estado internacionalmente es responsable cuando viola una obligación jurídica impuesta por una norma de Derecho Internacional general o del Derecho Internacional Particular, es decir, por haber cometido un acto ilícito internacional. Dicha norma puede estar originada en la costumbre, en un tratado o en los demás modos de constatación del Derecho Internacional comprendidos en el art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (Molteni, 1964, p. 44).

Álvarez Londoño (2006) define la responsabilidad internacional como la institución según la cual un sujeto de derecho internacional, al cual le es imputable un acto o una

omisión contraria a sus obligaciones internacionales, es conducido a dar reparación al sujeto de derecho internacional que ha sido víctima, bien sea en él mismo, en las personas o en los bienes de sus nacionales o agentes.

Si se tiene en cuenta estos conceptos, se asume que al existir un marco normativo internacional se exige a los sujetos el acatamiento de deberes, y ante el incumplimiento de estos, estarán obligados a garantizar su adecuado restablecimiento. Molteni (1964) refiere que existen elementos constitutivos de la responsabilidad:

Elemento Objetivo: consiste en una acción u omisión que viola una obligación internacional del Estado, es decir, que la conducta que origine tal violación puede consistir en una acción positiva o en la omisión de una conducta debida [...] Necesidad de que se produzca un acaecimiento exterior o daño. Es necesario para que surja la responsabilidad del Estado, la existencia de un evento exterior que produzca un daño, aunque éste puede no tener un contenido económico [...] El abuso de Derecho. Es controvertida la posibilidad de que se origine responsabilidad por el abuso de un derecho reconocido por el Derecho Internacional, es decir, no por la infracción de una obligación sino por el ejercicio de un derecho de manera arbitraria.

Del mismo modo, respecto a la responsabilidad internacional del Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2004), en el caso 19 comerciantes vs Colombia, determina:

Es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que tal responsabilidad puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder, órgano o agente estatal, independientemente de su jerarquía, que violen los derechos internacionalmente consagrados.

Además, la Corte ha considerado que “un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención” (p. 77)¹¹.

El principio general en materia de Responsabilidad Internacional es que el comportamiento de particulares o entidades no es atribuible al Estado. El único comportamiento asignado al Estado en el plano internacional es el de sus órganos de gobierno o de otros que hayan actuado bajo su dirección o control o por instigación de esos órganos, es decir, como agentes del Estado¹². Sin embargo, existen circunstancias bajo las cuales ese comportamiento resulta atribuible al Estado sobre la base de una relación de hecho específica entre la persona o la entidad que observa el comportamiento y el Estado.

La imputabilidad al Estado por la violación de normas imperativas¹³, esto es, la comisión por el Estado de crímenes internacionales compromete su Responsabilidad Internacional.

¹¹ Caso Caballero Delgado y Santana. Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C No. 22, párr. 56; Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 182; y Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 172

¹² Como se citó en Meza (2010),

El Proyecto sobre Responsabilidad del Estado no define la categoría de personas contempladas en el artículo 8. Al respecto, véase la definición del término “agentes” en el Proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre Responsabilidad de las Organizaciones Internacionales y sus comentarios, en el inciso c) del artículo 2 c) El término “agente” comprende a los funcionarios y a otras personas o entidades por medio de las cuales la organización actúa. Disponible en <http://untreaty.un.org/ilc/reports/2009/2009report.htm>. La Comisión de Derecho Internacional (CDI) es un órgano subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas. Tiene encomendado la preparación de proyectos de artículos en orden a la codificación y al desarrollo progresivo del derecho internacional. (p. 64)

¹³ El concepto de norma imperativa se encuentra en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969)

art. 53: Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.

Todo Estado es responsable por las violaciones cometidas por sus órganos, incluidas las fuerzas armadas. El Estado también es responsable por las violaciones que llevan a cabo personas o grupos que actúan de hecho obedeciendo sus instrucciones o bajo su dirección o control efectivo, según la interpretación de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la materia. Se trata del comportamiento de grupos que actúan de hecho en virtud de instrucciones o directivas o que en algún modo controla un Estado (Como se citó en Meza, 2010, p.65), poniendo a su servicio instituciones, poderes, medios económicos o de cualquier otro modo.

3.2. La Desaparición Forzada desde el marco jurídico internacional

Según lo referido por Uprimny & Saffon (2006), el delito de la desaparición forzada es una práctica que encuentra sus antecedentes en el régimen Nazi a través del decreto secreto de "noche y niebla", expedido en 1941 por el mariscal Keitel. Según este, todos los opositores del régimen debían ser desaparecidos sin dejar rastro alguno y sin suministrar ninguna información a sus familiares. Dicha práctica también fue utilizada sistemáticamente por los regímenes dictatoriales y autoritarios de Latinoamérica desde la década de los sesenta.

Esta situación evidenció la necesidad de promover la creación de un marco jurídico internacional de la desaparición forzada que se presenta actualmente en varios sistemas internacionales de protección de los derechos humanos: en el Sistema Universal, en el marco de las Naciones Unidas, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), en el Derecho Internacional y en el Derecho Internacional Humanitario.

También véase el artículo 26 del Proyecto sobre Responsabilidad del Estado: Cumplimiento de normas imperativas: "Ninguna disposición del presente capítulo excluirá la ilicitud de cualquier hecho de un Estado que no esté en conformidad con una obligación que emana de una norma imperativa de derecho internacional general". Asimismo resultan de particular interés los artículos 40, 41, 48 y 50 del Proyecto sobre Responsabilidad del Estado (Como se citó en Meza , 2010, p. 64).

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante Resolución 61/177 de diciembre 20 de 2006 consagra el derecho a “no ser sometido a desaparición forzada”; estableciendo en los siguientes términos que

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley (Art. 2).

El Derecho Penal Internacional (DPI), rama del Derecho Internacional que ha venido conformándose a partir de la segunda guerra mundial con base en los estatutos de los Tribunales Penales Internacionales *ad hoc* como Nuremberg, Tokio, Ruanda y Yugoslavia, entre otros, tiene en el Estatuto de Roma (aprobado por Colombia mediante la Ley 742 de 2002) de la Corte Penal Internacional, suscrito en 1998, su expresión más elaborada y con alcance en el Derecho interno, y por tanto, la más pertinente. El Estatuto concibe la desaparición forzada como un Crimen de Lesa Humanidad (art. 7.1.i), de la siguiente manera:

Crímenes de lesa humanidad.

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

1. Desaparición forzada de personas:

Como elementos integrantes del crimen de la Desaparición forzada se señalan:

Que el autor:

- a) Haya aprehendido, detenido o secuestrado a una o más personas; o
 - b) Se haya negado a reconocer la aprehensión, la detención o el secuestro o a dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas.
2. a) Que tal aprehensión, detención o secuestro haya sido seguido o acompañado de una negativa a reconocer esa privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas; o
 - b) Que tal negativa haya estado precedida o acompañada de esa privación de libertad.
3. Que el autor haya sido consciente de que:
 - c) Tal aprehensión, detención o secuestro sería seguido en el curso normal de los acontecimientos de una negativa a reconocer la privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas; o
 - d) Tal negativa estuvo precedida o acompañada de esa privación de libertad.
4. Que tal aprehensión, detención o secuestro haya sido realizada por un Estado u organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia.
5. Que tal negativa a reconocer la privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas haya sido realizada por un Estado u organización política o con su autorización o apoyo.
6. Que el autor haya tenido la intención de dejar a esa persona o personas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.
7. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil.
8. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo.

Internacionalmente la prohibición y sanción de la desaparición forzada se recoge a partir de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de Belén do Pará, que entró en vigor para Colombia en el 2005, y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada aprobada en Colombia mediante la Ley 1418 de 2010.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, hace referencia también a este hecho victimizante refiriendo que

La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar. [...] El deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. Incluso en el supuesto de que circunstancias legítimas del orden jurídico interno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean individualmente responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance (Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz, 2013)

Así mismo, esta Corte, en sus diferentes pronunciamientos, ha sido reiterativa en materia del “deber de prevención”, enfatizando en las características y componentes fundamentales de dicho deber de garantía, así como las características y niveles de la responsabilidad internacional del Estado. De ese modo, aparece la combinación entre la obligación de diseñar y poner en marcha lo que en esta Sentencia se denomina “una política general” de seguridad pública con sus respectivos espacios de prevención y persecución penal, entendiendo las dificultades que todo ello tiene en cualquier contexto y, peor aún, en contextos de criminalidad extendida y generalizada. La Corte (2009) establece los

componentes específicos del deber de prevención para casos determinados en una perspectiva que contribuye a que no se diluyan los criterios para determinar la responsabilidad internacional del Estado confundiéndola, eventualmente, con el crimen común (p. 160).

La Corte (2004) ha dicho en otros casos de desaparición forzada de personas que ésta constituye un hecho ilícito que genera una violación múltiple y continuada de varios derechos protegidos por la Convención; se trata de un delito contra la humanidad. Además, la desaparición forzada supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado para garantizar los derechos reconocidos en la Convención (p. 77).

Por su parte, el Derecho Internacional Humanitario, establece la desaparición forzada como un crimen de guerra siempre que se desarrolle en el marco del conflicto armado interno o guerra exterior. En este sentido, “los crímenes de lesa humanidad han sido considerados como graves violaciones a los derechos humanos” (Andreu-Guzmán, 2008, p. 19) y “pueden ser cometidos tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz” (Corte constitucional, 1968, art. 1b).

3.3. La Desaparición Forzada desde el marco jurídico nacional

La Constitución Política de Colombia (1991), en su Título II, Capítulo 1, De los derechos fundamentales señala en el artículo 12: “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles inhumanos o degradantes”.

De igual manera la Ley 599 de 2000 consagra el tipo penal de Desaparición Forzada en los siguientes términos:

Artículo 165. El particular que someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia (2015) ha señalado:

No admite discusión que la desaparición forzada es una conducta punible de ejecución permanente, esto es, que desde el acto inicial, la retención arbitraria de la víctima, el hecho continúa consumándose de manera indefinida en el tiempo, y el límite final de ejecución del delito está dado por la terminación de ese estado de privación de libertad, ya porque de alguna manera se recobra ésta (el victimario la libera, es rescatada, etc.), ya porque se ocasiona su deceso. Si la persona es privada de su libertad de locomoción, luego de lo cual se le causa la muerte, no genera incertidumbre la comisión de dos conductas diferenciables que, por tanto, concurren, en tanto se presentan dos momentos, uno de retención y otro de muerte, pero es evidente que la primera deja de consumarse cuando se causa el homicidio. Pero la fijación de un momento cierto en el cual termina la consumación no descarta la existencia de la desaparición. La situación es diversa cuando solamente existe un momento, esto es, sucede la privación de libertad y no existe prueba alguna respecto de que se puso punto final a ese estado; por tanto, la desaparición continúa ejecutándose de manera indefinida en el tiempo y, así, el término de prescripción de la acción penal (cuando sea viable tal instituto) no comienza a correr, pues tal sucede exclusivamente cuando cesa la privación de la libertad, o, lo que es lo mismo, cuando deja de consumarse la desaparición.¹⁴

Respecto de la consumación de la desaparición forzada ante el fallecimiento de la víctima, la Sala precisa que “la ilicitud de la conducta no acaba con la muerte de la víctima, porque la comunidad y la familia de la víctima siguen desconociendo su suerte, es decir, el

¹⁴ Para ampliar información ver: Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia. Sentencia SP17548-2015. M. Ponente: Patricia Salazar Cuellar. (16 de diciembre de 2015).

daño a los bienes jurídicos tutelados continúa materializándose” (Corte Suprema de Justicia 2015)¹⁵. En esta decisión la Corte señaló que

[...] cuando la comisión del punible inicia en vigencia de una ley y termina bajo otra posterior y más gravosa, se debe aplicar esta última norma. El principio de favorabilidad no rige en los delitos de carácter permanente, para impedir la impunidad por la concesión de un beneficio indebido. (Sala de Justicia y Paz, 2016)¹⁶

Cabe recordar, que el carácter continuado o permanente de la desaparición forzada responde al conocimiento que se tenga del destino o paradero de la víctima. Al respecto se menciona: “[el delito de desaparición forzada] es permanente por cuanto se consuma no en forma instantánea sino permanente y se prolonga durante todo el tiempo en que la persona permanece desaparecida” (Sala de Justicia y Paz, 2016)¹⁷

3.4. Marco normativo internacional respecto a los patrones de macro-criminalidad y el hecho victimizante de la Desaparición Forzada

En concordancia con lo anterior, es importante tener en cuenta el concepto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en el que se reconocen como características integrantes de un patrón de macro-criminalidad: “[...] la acumulación de infracciones de idéntica o análoga naturaleza, bastante numerosas y relacionadas entre sí para no reducirse

¹⁵ Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia. Sentencia SP17548-2015. M. Ponente: Patricia Salazar Cuellar. (16 de diciembre de 2015).

¹⁶ Para ampliar información ver: Sentencia. Sala De Justicia Y Paz Tribunal Superior De Bogotá. Magistrada Ponente: Alexandra Valencia Molina. Radicación: 110016000253200782794 N.I. 1357. (15 de julio del 2016).

¹⁷ Sentencia. Sala De Justicia Y Paz Tribunal Superior De Bogotá. Magistrada Ponente: Alexandra Valencia Molina. Radicación: 110016000253200782794 N.I. 1357. (15 de julio del 2016).

a incidentes aislados o a excepciones, y para formar un patrón o sistema” (como se citó en Tribunal Superior de Bogotá - Sala de Justicia y Paz, 2014, p. 179)¹⁸

En un sentido amplio, el concepto de macro-criminalidad política comprende, ciertamente, también a los crímenes internacionales de actores no estatales. En cuanto a esto, es de importancia secundaria si estas actividades pueden ser atribuidas al concepto tradicional de macrocriminalidad. En su favor hablaría el hecho de que también en estos casos el Estado territorialmente competente sería responsable, al menos por omisión, de no garantizar a sus ciudadanos la protección de derecho constitucional e internacional que les corresponde (...). La existencia fáctica de grupos no estatales que cometen crímenes internacionales es seguramente el argumento decisivo en favor de una comprensión más extensa del concepto de macro-criminalidad (Ambos, 2005, pp. 45-46).

Entonces, de acuerdo con la jurisprudencia internacional, un patrón está constituido por actos de carácter sistemático, reiterado o generalizado, que comportan *modus operandi* particularizados, en cuanto a que ponen en evidencia conductas generalizadas que se perciben claramente como graves violaciones a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario.

En este mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, menciona que la noción de “práctica” se define en dos sentidos: (i) constituida por tres elementos: sistemático, reiterado y generalizado; y a su vez (ii) como parte constitutiva del patrón: “Una práctica incompatible con el Convenio consiste en la acumulación de infracciones de idéntica o análoga naturaleza, bastante numerosas y relacionadas entre sí para no reducirse

¹⁸ European Court of Human Rights, *Ireland v. the United Kingdom* (1978, párr. 159). Ver igualmente, European Commission on Human Rights, *The Greek case*, *Anuany of the Conveant* (1969).

a incidentes aislados o a excepciones” (como se citó en Presidencia de la República de Colombia, Memo Caso Manuel Cepeda contra Colombia).

Adicional a esto, la Corte concluye que para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son elementos de una práctica: (i) conductas plurales o de carácter general; (iii) reiterado; o (iv) sistemático. En otros términos, conductas numerosas, repetidas en el tiempo y uniformes o con un nexo entre sí.

En cuanto al concepto de sistematicidad, tal y como lo ha comprendido la jurisprudencia internacional refiriéndose a una de las características de los Crímenes de Lesa Humanidad, alude a que con los actos de violencia se busque el cumplimiento de una política de la organización armada o aparato de poder irregular o regular. A su vez, el concepto de generalidad comporta el considerable número de personas objeto de la victimización y de graves actos de violencia, en un espacio de tiempo determinado (Tribunal Superior de Bogotá - Sala de Justicia y Paz, 2014, p. 179)¹⁹

Según la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), el carácter generalizado “consiste en que el acto debe ser: (1) frecuente; (2) llevado a cabo colectivamente; (3) que revista una gravedad considerable; y (4) ser dirigido contra una multiplicidad de víctimas” (Ramelli, 2011, p. 290).

¹⁹ Para más información ver: Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Bogotá, Sala De Justicia Y Paz. M.P. Uldi Teresa Jiménez López. Radicación: 110016000253200680450. Postulados: Guillermo Pérez Álzate y otros. (29 de septiembre de 2014).

3.5. Marco normativo nacional respecto a los patrones de macro-criminalidad de los grupos paramilitares y el hecho victimizante de la Desaparición Forzada

Con respecto a los patrones de criminalidad, el Tribunal Superior de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2014, p. 177)²⁰ refiere que las prácticas ejecutadas por los diferentes Bloques de las autodefensas y que hacían presencia en el país, adelantaban acciones de violencia contra las personas más vulnerables, con base también en las zonas de injerencia de la organización armada ilegal, así como en los medios logísticos utilizados por estos grupos para la ejecución de las violentas prácticas y los comportamientos que se observaron conexos. A partir de esto, fue posible corroborar las distintas prácticas macro criminales y la sistematicidad y generalidad con las que masivamente fueron victimizados los civiles.

Así mismo, se identificó que tales prácticas se dieron en cumplimiento de las políticas del grupo orientadas al sometimiento irrestricto de la población civil, de las regiones, sus territorios, su economía, su cultura, su política y su administración. Para ello, estas organizaciones concibieron como medios idóneos el arrebatar a las poblaciones todos y cada uno de sus derechos fundamentales, mediante incontables homicidios, desapariciones forzadas de personas, desplazamientos de población civil, delitos de violencia de género, reclutamiento ilícito, y otras graves violaciones que se dieron en condiciones de conexidad.

Es necesario hacer referencia a que uno de los modos de operación del Bloque Centauros y del Bloque Héroes del Llano y del Guaviare, consistió en desaparecer a las víctimas, a través de la inhumación en fosas ilegales, ya fuera con el cuerpo completo o desmembradas, o el arrojarlas a los ríos de la zona. Lo anterior, con el propósito de ocultar

²⁰ Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Bogotá, Sala De Justicia Y Paz. M.P. Léster M. González R. Radicado: 110012252000201400027. Postulados: Salvatore Mancuso Gómez y otros. (20 de noviembre de 2014).

los hechos y así no incrementar los índices de criminalidad, con lo que evitaban que la Fuerza Pública tuviera que perseguirlos. De este modo, el punible de Desaparición Forzada no se agotó con la muerte de las víctimas, puesto que la mencionada forma de actuar vino a esclarecerse en las versiones libres de los postulados que tuvieron lugar dentro de este proceso transicional, con lo cual el agotamiento de esta conducta se materializó en el marco de este proceso.

Con base en lo anterior, es posible inferir que la Desaparición Forzada constituyó, para los integrantes de estas estructuras criminales, una motivación con unas prácticas graves, repetitivas y generalizadas hacia la mayoría de sus víctimas en las zonas donde delinquieron. La intención de desaparecer los cuerpos obedecía a una directriz de la Organización paramilitar, bajo la práctica de ocultamiento, con el fin de no dejar evidencia de la ocurrencia de la conducta delictiva desarrollada después de cometido el homicidio. Esto permitió impedir que se visibilizara el delito y que los índices de criminalidad no develaran los planes criminales de la organización paramilitar, situación que fue cohonestada por parte de algunas unidades de la Fuerza pública en las zonas de mayor impacto.

De igual manera, el Tribunal Superior de Bogotá - Sala de Justicia y Paz (2014, p. 890)²¹ refiere que los patrones delictivos detectados en este proceso fueron el Homicidio y la Desaparición Forzada; y que el tiempo y la georeferenciación en que fueron cometidos, revelan que no fueron hechos aislados, sino que hicieron parte de una política que se fijó al interior de la cúpula del grupo armado ilegal, desde donde se impartieron las instrucciones

²¹ Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Bogotá, Sala De Justicia Y Paz. M.P. Léster M. González R. Radicado: 110012252000201400027. Postulados: Salvatore Mancuso Gómez y otros. (20 de noviembre de 2014).

para cometerlos. Lo anterior permite afirmar la existencia de un aparato organizado de poder, por el que deben responder no sólo quienes desde la base las ejecutaron, sino quienes desde la cúpula de la estructura criminal las impartieron.

3.6. La Justicia Transicional a Nivel Internacional y Nacional

La Declaración Universal de Derechos Humanos, además de establecer la positivización de los Derechos Humanos, ha supuesto un reto para los Estados partes, en el sentido de que los hace responsables al momento de definir mecanismos que garanticen su adecuado cumplimiento y protección.

Al respecto, cabe mencionar lo señalado por la Corte Interamericana acerca de la responsabilidad de los Estados de acatar lo establecido en el derecho internacional, especialmente aquello relacionado con la protección de Derechos Humanos. Así lo destaca Nash (2013):

[...] (una) obligación propia de todo poder, órgano o autoridad del Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos [...] controlar que los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetados y garantizados. Y es que los Estados Parte muchas veces quieren hacerse los de la vista gorda con los compromisos que asumen, sin darse cuenta que desde la expedición de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados de 1969, en sus artículos 53 y 64²², se aplica universalmente el principio *pacta sunt servanda*, que genera la obligación de cumplir los imperativos mandatos de los tratados y más cuando éstos se refieran a la protección de los derechos fundamentales (como se citó en Olano García, 2016, p.67).

²² Artículo 53. Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.

Artículo 64. Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará.

Es necesario reconocer la relación entre violencia y derechos humanos, en el sentido de establecer corresponsabilidad al momento de hacer uso de estos términos, o dicho de otra forma, “la violencia es el origen y, como tal, el principio de los derechos humanos” (Maldonado, 2000, p.18). De ahí que cada vez que se trate el tema de derechos humanos se debe hacer en función de las manifestaciones o expresiones de violencia que se dan entre los seres humanos.

Como se ha podido observar, Colombia es un país con una importante herencia de violencia que ha traído como consecuencia lógica una alta vulneración de derechos humanos. En este sentido, el Estado, especialmente después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, ha integrado al sistema normativo nacional toda una serie de disposiciones legales de carácter internacional que apoyan el respeto y la garantía de derechos, conformando así el llamado Bloque de Constitucionalidad. La Constitución Nacional en sus disposiciones normativas, especialmente en aquellas referidas a derechos fundamentales, plasma el interés de observar de manera adecuada los aspectos relativos a la garantía de dichos derechos.

En este orden de ideas, en Colombia la norma principal es la Constitución Nacional la cual es rectora frente a las leyes y decretos que se expidan, los cuales deberán ser interpretados de acuerdo con ella y las normas del derecho internacional que conforman el bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, la Ley 975 en su artículo 2 expresamente señala que

[...] la interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia. La incorporación de algunas disposiciones internacionales en la presente ley no debe

entenderse como la negación de otras normas internacionales que regulan esta misma materia [...] De esta manera el legislador reconoce la vinculatoriedad de las normas de derecho internacional y su importancia como orientadoras de la interpretación de la normatividad interna (Huber, 2007, p.154).

Debido a lo anterior, debemos tener en cuenta que el Bloque de Constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin estar formalmente en el texto de la Constitución, comparten su misma fuerza normativa, puesto que la propia constitución así lo ordena (Uprimny Yepes, 2006, p. 26). Estas normas se refieren a los tratados internacionales sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, las declaraciones o principios para la promoción y protección de los derechos humanos, y la jurisprudencia de algunas cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De ese modo, es posible inferir que ante altas condiciones de vulnerabilidad y poca presencia estatal, grupos armados ilegales, como las Autodefensas Unidas de Colombia que hicieron presencia en el departamento del Meta, se consolidaron en el territorio conllevando al sometimiento de la población civil, la cual no era partícipe directa de las acciones violentas y diferentes enfrentamientos que tenían lugar en el marco del conflicto armado. También, esto daba lugar a la implementación de prácticas sobre las personas, generando hechos victimizantes asociados a homicidios selectivos, tortura, desaparición forzada, entre otras.

De ahí que la confrontación armada existente en Colombia tenga una relación directamente proporcional entre las graves deficiencias mostradas por el modelo de Estado social y de Derecho colombiano, y la vulnerabilidad política, cultural, social, geográfica,

económica y de seguridad de las regiones. Estas fueron captadas primeramente por la insurgencia y luego por los grupos paramilitares, dando lugar a la ocurrencia de masivos y sistemáticos hechos de violencia a los que fue sometida la población civil.

En relación con los hechos de violencia e impunidad ocurridos en nuestro país y que conllevan a la vulneración de derechos de la población civil, se generó la búsqueda y puesta en marcha de una alternativa frente a la situación que se estaba viviendo en el país, poniendo de manifiesto la necesidad de dar lugar a procesos donde grupos al margen de la ley se acogieran bajo un modelo de Justicia Transicional que permitiera superar y solucionar el conflicto armado. Se entiende por Justicia Transicional

[...] el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales (International Center for Transitional Justice, s.f.).

La Justicia Transicional hace énfasis en la manera como se enfoca el conjunto de acciones para realizar un proceso de transición que permita pasar de un estado de guerra a un estado de paz. Al respecto Uprimny y Saffon (2005) señalan que no hay que olvidar que en los actuales momentos, los procesos de Justicia Transicional deben contemplar las recomendaciones jurídicas impuestas por la legislación internacional y, en el caso presente, las disposiciones de la Corte Penal Internacional, fundamentalmente frente a la individualización de los actores que cometieron crímenes de lesa humanidad y las exigencias para proteger los derechos de las víctimas, mediante la búsqueda de la verdad y la reparación como elemento fundamental para alcanzar la reconciliación.

Es así como la Justicia Transicional se presenta como un modelo alternativo de enfrentamiento del crimen que, en lugar de fundarse en la idea tradicional de retribución o castigo, parte de la importancia que tiene para la sociedad la reconciliación. En ese sentido,

[...] todos los autores y grupos que la defienden coinciden en propugnar que el derecho penal deje de centrarse en el acto criminal y en su autor, y gire la atención hacia la víctima y el daño que le fue ocasionado (Uprimny y Saffon, 2005, p. 7).

Cabe mencionar que la Justicia Transicional plantea como principales objetivos que las víctimas sean reparadas, se propenda por la reconstrucción del tejido social, que el responsable de la conducta delictiva sea reincorporado y principalmente que las relaciones sociales sean restauradas: “La Justicia Restaurativa no sólo busca involucrar a todas las partes de un conflicto, sino que también pretende la restauración de los valores morales, la dignidad de las personas y la equidad social” (Díaz Colorado, 2008, p.121).

Es así como el modelo propuesto a partir de los procesos de Justicia Transicional se toma como una alternativa que permite dar un tratamiento diferente a los delitos y las sanciones para los mismos, ofreciendo un cambio en la perspectiva de la justicia formal, en donde el interés supremo no es el castigo del victimario sino la reparación de la víctima.

3.7. Caso Concreto

Teniendo en cuenta el objeto principal de la presente investigación, es importante destacar el papel que juega el derecho penal internacional en la protección de los derechos humanos, ya que ha llegado a convertirse en un mecanismo a través del cual se busca responder a la inoperancia o ineficacia expuesta por los instrumentos estatales en la protección de los Derechos Humanos. Al respecto Werle (2011) menciona que

[...] la función protectora de los derechos humanos del derecho penal internacional resulta especialmente clara en los crímenes de lesa humanidad. En ellos se prevén penas para los ataques sistemáticos o masivos a derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad de desplazamiento y el derecho a la dignidad humana. Con ello queda de manifiesto que la idea de humanidad es la base de la protección de los derechos humanos y del derecho penal internacional. El concepto ampliado de paz que sirve de base al derecho penal internacional conecta la protección de los derechos humanos con el derecho penal internacional, también respecto de los demás crímenes internacionales. (p. 103)

También para el derecho penal internacional rige el principio según el cual su utilización como herramienta sólo es admisible como *ultima ratio*, es decir, cuando el resto de los mecanismos de protección (nacionales e internacionales) fracasan (Werle, 2011, p. 104). Es así, como el Estatuto de Roma se convirtió en una fuente primaria del derecho penal internacional, ya que se trata de un tratado internacional a través del cual se definen las reglas de interpretación, los elementos de los crímenes y las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional.

Con base en lo anterior, es menester destacar lo siguiente:

Como lo señala el artículo 30 del Estatuto de Roma, salvo disposición en contrario, una persona será penalmente responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte únicamente si los elementos materiales del crimen se realizaron con intención y conocimiento. Cuando no se hace referencia en los elementos de los crímenes a un elemento de intencionalidad para una conducta, consecuencia o circunstancia indicada, se entenderá aplicable el elemento de intencionalidad que corresponda según el artículo 30, esto es, la intención, el conocimiento o ambos. A continuación, se indican excepciones a la norma del artículo 30 sobre la base del

Estatuto y con inclusión del derecho aplicable en virtud de las disposiciones del Estatuto en la materia (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2003, p. 101).

Al respecto y para el caso en particular, es necesario tener en cuenta lo referido en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998), el cual define así los delitos de lesa humanidad

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
 - a) [...]
 - i) Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.

De ahí que para el caso de la desaparición forzada del señor William Murat, y considerando lo desarrollado en capítulos anteriores respecto al contexto y los hechos, este podría considerarse un delito de lesa humanidad ya que se enmarca en una práctica generalizada o sistemática. A su vez, esta se convirtió en una estrategia a través de la cual los diferentes actores armados, que han hecho parte de la problemática del conflicto armado en Colombia, buscaban garantizar el control territorial, generar el terror entre la población civil, o también como una forma de ocultar los crímenes cometidos, así como la dimensión o barbarie con que se perpetraban los mismos.

Además, al ser un delito de carácter continuado y atentar contra varios derechos humanos, como son el derecho a la libertad, a no ser sometido a tratos crueles inhumanos o degradantes y el derecho a la vida, se enmarca en los lineamientos internacionales en materia de delitos dentro del derecho penal internacional.

Werle (2011) en relación con el concepto de crimen de derecho internacional hace referencia al desarrollo que sobre este ha hecho el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en el cual, a través de su jurisprudencia distingue tres niveles dentro de la categoría *offence*, siendo preciso en cada uno de ellos la prueba de determinados presupuestos objetivos y subjetivos:

En los crímenes de guerra y en los de lesa humanidad es preciso, en primer lugar, la prueba del hecho global (*general requirements*), esto es, hay que determinar si existe un conflicto armado o un ataque contra la población civil y si tenía conocimiento de ello el acusado. Posteriormente, se debe debatir si se ha producido alguno de los hechos individuales que configuran el delito (*specific act*) y si concurren en el acusado las exigencias de la parte interna del hecho. Finalmente, en un nivel de prueba especial se valora la responsabilidad individual del acusado (*individual criminal responsibility*). Más concretamente, se trata de subsumir el comportamiento del acusado en alguna de las formas de intervención delictiva que se contienen en el art. 7 del Estatuto. En este momento se discuten las figuras delictivas complejas del Derecho penal internacional, como la responsabilidad del superior o la responsabilidad en el marco de una empresa criminal conjunta (*joint criminal enterprise*). (p. 242)

A partir de lo anterior, y considerando los hechos que rodearon el caso concreto, es viable determinarlo como un crimen internacional, toda vez que la desaparición forzada se contempla en el Estatuto de Roma, además, y de acuerdo con lo relatado por Pilar Murat,

así como los diferentes documentos revisados y que contienen la reconstrucción histórica de la problemática del conflicto armado en Colombia, es posible enmarcarlo en los elementos que componen el aspecto interno y externo del crimen internacional. Esto último debido a que ocurrió en el marco de un contexto de violencia, que los responsables de los hechos de violencia conocían las consecuencias de sus conductas y que los ataques se dieron de manera generalizada y sistemática contra la población civil. Así lo destaca Werle (2011),

La calificación de un delito como un crimen de derecho internacional es independiente de si un ordenamiento jurídico interno de un Estado permite a los tribunales de ese Estado la aplicación directa de las normas (penales) internacionales. Aunque el derecho constitucional de un Estado requiera como fundamento de la imposición de una pena la existencia de una ley escrita, ello no es un obstáculo ni para la clasificación de una conducta como crimen de derecho internacional, ni para su castigo por un tribunal internacional (p. 94)

Como se hizo referencia anteriormente, el artículo 7.2 del Estatuto de Roma (1998) establece que la desaparición forzada tiene que ver con

[...] la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.

En este sentido y como se desarrolló en el contexto, en 1965 el gobierno de Colombia adoptó el Decreto 3398, que se convertiría en legislación permanente a través de la Ley 48 de 1968. Como explica el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia de 1998, a través de dicha normativa

[...] se dio fundamento legal para la organización y promoción de grupos civiles armados, denominados autodefensas campesinas. Dentro de este marco, miembros de las fuerzas armadas dotaron de armamento, entrenaron y prestaron apoyo logístico a estos grupos para apoyar a la fuerza pública en zonas de conflicto (párr. 86).

Así mismo, cabe destacar los hallazgos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), a través de los cuales se establece que en Colombia existen aproximadamente 80.514 desaparecidos por el conflicto armado. Estos casos, además de representar una gran complejidad para el esclarecimiento de la verdad, y enfrentarse al riesgo de no ser encontrados o volverse a perder entre el papeleo y la falta de articulación de las instituciones encargadas de su búsqueda, también se enfrentan al olvido de la sociedad (Cardona, 2018).

A pesar de que, según lo relatado por la hija del señor William Murat, por medio del proceso de Justicia y Paz fue posible conocer sobre el destino de su padre, y tener certeza de los responsables de su desaparición, este delito continúa, ya que no se ha determinado con exactitud el paradero de la persona, ni se han podido recuperar sus restos. Así, se configura en un hecho violatorio de los derechos humanos, sobre el cual el Estado Colombiano no ha logrado garantizar el esclarecimiento material.

El CNMH reporta que en Colombia 82.998 personas fueron desaparecidas forzosamente:

De aquellos casos con conocimiento del perpetrador, 52% de los casos, la distribución es así: grupos paramilitares 26.475 (62,3%), guerrillas: 10.360 (24,3%), grupos posdesmovilización: 2.764 (6,5%), agentes del Estado: 2.484 (5,8%), agentes del Estado-grupos paramilitares: 388 (0,9%). Casos sobre los que se tiene información: 42.471. [...] La desaparición forzada es, tal

vez, una de las prácticas represivas más atroces utilizadas por los actores del conflicto para imponer su control (Cardona, 2018).

Además, tal y como se ha venido desarrollando a lo largo de este documento, es importante tener en cuenta que el crimen de la desaparición forzada de personas es un delito *pluriofensivo* en materia de derechos humanos, porque no solo afecta a la persona en su dignidad y libertad, ya que imposibilita que cuente con las garantías de protección consagradas en la ley; sino que también es un hecho que causa graves sufrimientos, además de la víctima, a sus familias. Así se puede percibir en el caso concreto:

[...] mi abuela murió en el año 2014, murió de viejita con la esperanza de encontrar a mi padre, en sí, lo último que me dijo mi abuela es que me dejaba esta herencia a mí y a mis hermanas [...] ha sido más bien como un impacto horrible, el hecho de no tener imagen paterna, la falta de no tener a mi padre. El primer día de clases, mi fiesta de 15, son cosas que no se pueden llenar. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018)

Esta característica pluriofensiva se deriva de los elementos concurrentes y constitutivos del concepto de desaparición forzada que se encuentran en los instrumentos internacionales alusivos, que incluyen: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o privados, con la tolerancia o aquiescencia de éstos, y c) la negativa de reconocer la detención o de revelar la suerte o paradero de la persona desaparecida (Corte IDH, 2009, párr.140).

Tomando en consideración lo anterior, y frente al caso de la desaparición forzada de William Murat, es posible evidenciar la impunidad manifiesta en este tipo de hechos, ya que desde el momento en que se dio la desaparición hasta la actualidad, no ha sido posible garantizar el acceso efectivo a mecanismos de búsqueda que permitan conocer la verdad y acceder a la justicia.

Capítulo 4. Acceso A La Justicia

La Organización de las Naciones Unidas ha establecido que el acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho. La Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho hizo hincapié en el derecho a la igualdad de acceso a la justicia para todos, incluidos los miembros de grupos vulnerables, y reafirmó el compromiso de los Estados Miembros de adoptar todas las medidas necesarias para prestar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables que promovieran el acceso a la justicia para todos, entre ellos la asistencia jurídica (Naciones Unidas, 2005, párrs. 12 y 14).

[...] vine a la fundación²³ y desde 2013 me emplearon, y quise empoderarme en la búsqueda de la verdad, yo quiero la verdad [...] Mi tía y mi abuela siempre pidieron ayuda a las autoridades y siempre les negaron, en Cabuyaro les negaron el acompañamiento que porque era muy peligroso y que ellos no iban, luego cuando se enteraron que en Barranca de Upía estaba el restaurante, la escuela y eso, ellas quisieron ir a indagar también, y también les negaron el acompañamiento diciéndoles que ellos no iban por allá porque levantaban el avispero que era muy peligroso, sin embargo mi tía y mi abuela les respondieron que iban a ir, que iban a ir solas y que en caso de que no vayan a aparecer y que no se supiera más de ellas que fueran allá porque ellas iban a estar allá. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018)

Al respecto, Thompson (como se citó en Bayá, s.f.) expresa que la administración de justicia

es la forma principal en que se traduce la obligación estatal de proveer los canales y sistemas para que toda persona pueda dirimir sus conflictos jurídicos o esclarecer sus pretensiones, el que

²³ Se hace referencia a la Fundación Nydia Erika Bautista, en la cual se encuentra el expediente de William Hernando Murad.

alguien acuda a la justicia es el ejercicio de un derecho, y la abstención del interesado de hacerlo debido a razones propias del sistema o proyectadas por él, equivale a un problema de acceso, al punto que la inexistencia de condiciones favorables para que lo haga, pueden hacerse equivalentes a una denegación de justicia. (p. 1)

En el archivo de la Fundación Nydia Erika Bautista reposa el expediente de William Hernando Murad, en el que se encuentra contenida la información relacionada con las diligencias adelantadas por su familia, con el fin de conocer la verdad sobre el paradero de William Murad. El día 01 de agosto de 2001, las señoras Leonor Leal y María Teresa Murad denunciaron el caso en la estación de policía de Cabuyaro, Meta. Posteriormente, y ante la falta de respuesta de las autoridades policiales, realizaron denuncia ante el juzgado promiscuo municipal de Cabuyaro, el día 06 de agosto de 2001. En el año 2004, se reasignó el caso a la fiscalía 34, la cual emitió resolución inhibitoria y cierre provisional de la investigación el día 07 de junio, exponiendo como argumento la imposibilidad de individualizar o identificar a los autores o partícipes del hecho²⁴.

Guzmán y Prieto (2013) establecen:

Entendemos por acceso a la justicia el derecho que tiene toda persona o grupo de personas a que, (1) sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad, (2) se garanticen mecanismos adecuados y sencillos (3) del sistema de justicia (4) para la resolución de situaciones que ameritan la intervención del Estado (5) y la adopción de una decisión mínimamente satisfactoria y (6) oportuna (7) a la que se le dé cumplimiento (p. 16).

Los diferentes marcos normativos a nivel internacional y nacional han establecido la igualdad de las personas respecto al acceso a derechos, así como a los mecanismos dispuestos para su protección. De ahí que todas las barreras de acceso que impidan que esto

²⁴ Expediente William Hernando Murad, Cuaderno No. 1, Archivo Fundación Nydia Erika Bautista.

ocurra, son contrarias a la ley, al representar impedimentos para las personas que requieran contar con un recurso judicial efectivo, implicando una vulneración directa a los derechos fundamentales de quienes las soporten.

El día 27 de octubre de 2010, la Fundación Nydia Erika Bautista remitió al fiscal 34 seccional de Puerto López una solicitud para que una fiscalía especializada asumiera la búsqueda por el caso de desaparición de William Murad. Así mismo, presentó demanda de constitución de parte civil el 21 de septiembre de 2010, la cual fue admitida por la fiscalía 34 seccional el 24 de junio de 2011.

La Convención Interamericana de Derechos Humanos (1969) en sus artículos 8 y 25 también hace referencia a las garantías judiciales y la protección judicial

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter [...] 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Así mismo, en el proceso adelantado en el marco de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz se buscaba la reincorporación de miembros de grupos armados ilegales con el deber de garantizar los derechos de las víctimas a la Verdad, Justicia y Reparación. Además, esta ley introduce planteamientos tales como el esclarecimiento de la verdad como

elemento esencial en la búsqueda del restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado.

[...] después de (que) matar(an) a mi padre, Jimmy le preguntó a Pollo que por qué [...] (lo) obligó a [...] matar a William, Pollo le dijo que mi padre supuestamente vendía droga en el municipio. Jimmy en su declaración dice que él nunca había escuchado de mi papá, el trabajo de Jimmy era cobrar vacunas a la gente, según dice mi tía dice que ellos supuestamente no habían citado a mi papá, ellos sí citaban a gente, pero con plata y nosotros somos personas muy humildes, personalmente lo veo como [...] simple morbo por ver morir a una persona, en realidad no hubo ningún fin. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018)

El 21 de Julio de 2011, la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal del Distrito recibió la versión libre de José Antonio Hernández Pérez, alias “Jimmy”, desmovilizado del bloque Héroes de los Llanos de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien operaba en Barranca de Upía para el año 2001. Después de conocer algunos detalles por parte del fiscal y ver una foto de la víctima señaló:

Sí, pero él no vino en carro, vino en cicla, sí tengo conocimiento, ese señor se lo llevó Roger Pollo, y a ese señor se le dio de baja por ahí en los alrededores de Barranca, por ahí está, inclusive ya acepté ese hecho, yo lo acepté²⁵.

Una vez hubo una prospección en base a la declaración dada por alias Jimmy, pero se hallaron otros cuerpos, de una señora y un señor, sin embargo, no eran los de mi padre. Las autoridades muy negligentes en ese sentido porque siempre la excusa es que no hay recursos para llevar al victimario para que indique, que el terreno que ta ta ta, eso fue hace cuatro años, pero no hay ningún resultado, el caso está inhibitorio. Llevo dos semanas trabajando

²⁵ Expediente William Hernando Murad. Archivo Fundación Nydia Erika Bautista. Cuaderno No. 2, folio 96-99.

con mi abogado, estamos trabajando en una demanda para que nos den resultados para ver que han hecho, en principio el poder lo tenían mis abuelos, pero ellos murieron, hasta ahí no se había hecho nada, yo firmé poder hace poco esperando que sea algo fructuoso. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018)

El derecho a la justicia, en el contexto de la Justicia Transicional, se deriva del derecho al acceso a la justicia y a la protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y su relación con el artículo 1.1. Este derecho implica que se investiguen los hechos y se identifique, juzgue y sancione a los responsables. Además, esta Corte ha hecho énfasis en la importancia del deber de los Estados de erradicar la impunidad. Así, por ejemplo, ha dicho que la impunidad “propicia la repetición crónica de violaciones de derechos humanos” y promueve “la total indefensión de las víctimas y de sus familiares, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos” (CIDH, Sentencia de 22 de septiembre de 2009).

Por su parte, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, respecto al modus operandi del frente Pedro Pablo González, del bloque Héroes de los Llanos de las AUC, menciona:

La forma de actuar cuando era en zona rural consistía en ubicar las fincas, retener a los ciudadanos, transportarlos a otros lugares donde les daban muerte y desaparecían sus cuerpos, o instalar retenes en las vías públicas o carreteras, interceptar los vehículos, identificar a las víctimas y conducirlos a matas de monte o inmuebles abandonados, donde les daban muerte; y en algunos casos ubicaban las personas en tiendas y para asesinarlas las llevaban a otro lugar en el que las torturaban y hurtaban sus pertenencias, pero cuando el objetivo residía en las cabeceras municipales, eran citadas al área rural, donde les daban muerte y desaparecían los

restos en aras de evitar cuestionamientos de los pobladores (Sentencia, 25 de Julio de 2016, p. 389).

A Jimmy lo citaron, porque mi tía sí tenía claro quién era, cuando lo estaban judicializando luego mi tía le informó que él tenía responsabilidad en el crimen contra mi familia, fue voluntario, él se declaró en sentencia anticipada, él lo hizo creo yo que fue por el beneficio, él aceptó los cargos del crimen de mi padre por la denuncia de mi tía. Sobre el lugar donde enterraron a mi padre, él cuenta que fue en medio de unos árboles, dice que el hueco es profundo 2 metros de profundidad [...] sin embargo, ahí es donde yo veo como la falta de voluntad del Estado para ir a hacer esa prospección.

No han hecho la búsqueda clara de solo mi papá, uno entiende que son muchos casos, sin embargo, hay muchas personas trabajando y si tuvieran una mejor organización de sus labores, a mi padre y a muchos ya los hubieran encontrado, si de verdad les importara. Algo que debería hacerse es una recolección de ADN por zonas, que eso se puede. Recuerdo que en una conferencia ellos dijeron que lo habían hecho, pero eso nunca lo han hecho, es como solo para decirlo ante los medios, pero eso nunca lo han hecho, si de verdad lo hubieran hecho la mayoría de los NNs que están en el CTI ya habrían encontrado a sus familiares [...] A mi abuelo y a mi abuela fueron los únicos que les tomaron muestras, yo quisiera solicitar también que nos tomaran muestras a mí y a mis hermanos, como una actualización. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018)

Al respecto, la CIDH menciona que “el artículo 8.1 de la Convención debe interpretarse de manera amplia de modo que dicha interpretación se apoye tanto en el texto literal de esa norma como en su espíritu”²⁶. Interpretado de esa manera, el mencionado texto comprende también el derecho de los familiares de la víctima a las garantías judiciales, por cuanto

²⁶ Caso Las Palmeras, supra nota 160, párr. 58; Caso Durand y Ugarte, supra nota 160, párr. 128; y Caso Blake, supra nota 151, párr. 96.

“todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia” (Naciones Unidas, 1992, art. 1.2)

En consecuencia, el artículo 8.1 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 25.1 de la misma, confiere a los familiares de las víctimas el derecho a que la muerte de estas últimas sea efectivamente investigada por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los responsables de estos ilícitos; en su caso, se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido (CIDH, Sentencia de 5 de julio de 2004, p. 60).

El alto tribunal internacional menciona que, en reiteradas ocasiones, la Corte ha enfatizado que

[...] no basta con la existencia formal de los recursos, sino que éstos deben ser eficaces, es decir, deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios (CIDH, Sentencia de 5 de julio de 2004, p.102).

La Justicia Transicional implica un “compromiso ético” con la transformación de una realidad en la que los ciudadanos ven vulnerados sus derechos. Los diferentes mecanismos se refieren a justicia penal, reparación, verdad, reforma institucional y garantías de no repetición. No existe una fórmula única para la implementación de estos mecanismos. Estos se ajustan tras considerar cuidadosamente el contexto específico en el que se van a aplicar. (Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2011)

Cabe mencionar que, aunque los procesos de justicia transicional resultan inéditos en nuestro país, y se han logrado avances en cuanto a la implementación de estos, aún existen interrogantes relacionados con su efectividad, y las garantías procesales respecto a los

derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, como eje central de dichos procesos.

Capítulo 5. Impactos Y Afrontamientos

Los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales, especialmente aquellos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconocen que las violaciones graves a derechos humanos traen como consecuencia importantes afectaciones tanto a nivel individual como familiar. Al respecto, se concibe que el núcleo familiar es un grupo social, el cual padece de cambios en su estructura en el momento que una vulneración sucede y a partir de ella, es necesario realizar un ejercicio de comprensión de dicha afectación, con el fin de establecer medidas de reparación, no solo a nivel individual, sino también a nivel familiar y comunitario. Se entiende entonces que, las violaciones de derechos humanos y sus consecuencias suponen experiencias traumáticas en el sentido de que conllevan un sentimiento de ruptura en la continuidad de la vida, y marcan un antes y un después en la vida de las personas afectadas (Beristáin, 2007, p. 12).

Ahora bien, cuando se presenta un caso de desaparición forzada, las afectaciones se perciben de manera diferente, ya que se genera un daño en el ser humano que es desaparecido, quien padece un sufrimiento indescriptible y, al tiempo, se causan daños incalculables, persistentes y duraderos a los familiares de la víctima, y también al entorno de las víctimas, las comunidades, y la sociedad en su conjunto.

[...] hablando con otras personas me dicen que lo deje descansar en paz, pero a través de mis sueños yo veo que él no está descansando en paz, que no va a descansar en paz porque es que él no pidió estar allá, pero hay un tiempo para todo, él debió morir a mi lado de viejito no de esa forma. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018)

La desaparición de una persona provoca en sus familiares cercanos un impacto negativo a nivel psicológico, de proporciones desmesuradas, puesto que es una situación inesperada y de duración indeterminada. Una constante de dudas y preguntas que taladran el pensamiento de aquel que desea su regreso, los seres queridos del desaparecido quedan bloqueados emocionalmente y sus familiares no pueden seguir el rumbo normal de un proceso de duelo (negación, ira, pacto, depresión y aceptación) ya que el desaparecido no está muerto hasta que se hallen sus restos.

En estos contextos, cabe mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca la importancia de reconocer el nivel de afectación que genera la vulneración de Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario. Esto se logra identificar a partir del análisis del daño sufrido.

Mi papá y mi mamá no estaban casados, simplemente mi papá y mi mamá se gustaron, mi papá estaba casado, yo tenía cuatro años, yo no lo recuerdo, pero lo que dice mi mamá es que mi papá aportaba todo, no teníamos casa propia, no puedo decir que mi papá nos compró vivienda, pero eran los planes, eran las proyecciones. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.2, 29 de junio, 2019)

Celedón (2014), al buscar definir el concepto de Daño, parte del acuñado por la Real Academia Española la cual establece que este supone la noción de un menoscabo o detrimento sobrevenido respecto de una situación previa más favorable. En otras palabras, se entiende el daño, como un estadio desfavorable que se ha producido como consecuencia directa de la vulneración de Derechos Humanos y que es difícil de superar sin el debido reconocimiento de este. Entender que el daño “es el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya sea en sus bienes vitales naturales,

ya en su propiedad o en su patrimonio” (Como se citó en Calderón, 2005b, p. 9)²⁷ permite reconocer que este puede presentarse en diferentes modalidades. De ahí que sea necesario examinar lo que jurisprudencialmente se ha logrado establecer respecto del daño.

Por su parte, Rojas Báez (2008) presenta las siguientes definiciones, útiles en la comprensión del tema:

1. Daño Físico

El daño físico se refiere al conjunto de afectaciones físicas y daños severos, e irreversibles en muchos casos, que sufren las víctimas de violaciones de derechos humanos. [...]

2. Daño Material

Se entiende, de manera general, que el daño material incluye “la pérdida de ingresos, gastos médicos, los gastos incurridos en la búsqueda de la víctima ante el encubrimiento de las autoridades o la falta de investigación, y otros gastos de carácter pecuniario que son causados por la violación”²⁸. Según la Corte (Interamericana de Derechos Humanos), “[el] daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos”²⁹ [...]

El daño material comprende, por un lado, el lucro cesante o *lucro cessans*, el cual se refiere a la pérdida de ingresos de la víctima, así como también el daño emergente o *damnum emergens*, que enmarca los pagos y gastos en que han incurrido la víctima o

²⁷ Santos Briz, Jaime. Derecho de Daños. Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, España, 1999, p. 254, citado por Calderón, s.f. p. 11

²⁸ Para ampliar información ver: Jo M. PASQUALUCCI, THE PRACTICE AND PROCEDURE OF THE INTERAMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS 255 (2003) [traducción del autor] (Como se citó en Rojas Báez, 2008)

²⁹ Para ampliar información ver: Acosta Calderón v. Ecuador, 2005 Corte I.D.H. (ser. C) No. 129, ¶ 157 (24 de junio de 2005). (Como se citó en Rojas Báez, 2008)

sus familiares durante la investigación de la violación y el destino final de víctimas desaparecidas o ejecutadas. [...]

3. *Daño Inmaterial o Moral*

La Corte Interamericana entiende que el daño moral o inmaterial “puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, y el menoscabo de valores muy significativos para las personas, como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia”³⁰. En primer lugar, la Corte ha asociado el daño moral con el padecimiento de miedo, sufrimiento, ansiedad, humillación, degradación, y la inculcación de sentimientos de inferioridad, inseguridad, frustración, e impotencia. (pp. 105, 106, 109)

Sobre este último, Gobetti (2003), como se citó en Celedón Rivero (2014)

considera que:

El daño moral es el padecimiento de índole espiritual que sufre una persona herida en sus afecciones legítimas. Está en juego un interés jurídico de orden afectivo, es la incidencia del acto ilícito en la psiquis del damnificado” (p 2). Mientras que Mendoza (s, f) considera que el daño moral lo constituye el dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual, la humillación, y, en general, los padecimientos que se han infligido a la víctima.

Así mismo, la teoría del daño al proyecto de vida es señalada por Fernández Sessarego (1998), como se citó en Woolcott Oyague y Monje Mayorca (2018):

[...] la teoría del “daño al proyecto de vida”, [...] tiene como sustento original la filosofía de la existencia, la cual postula que la libertad compone la esencia misma del hombre, cualidad que lo hace diferente y único ante los demás seres de la naturaleza y le concede dignidad. Facultad que permite que cada uno de nosotros pueda decidir y elegir después

³⁰ Para ampliar información ver: Bulacio, 2003 Corte I.D.H. (ser. C) No. 100, ¶ 90; Acosta Calderón, 2005 Corte I.D.H. (ser. C) No. 129, ¶ 158 (24 de julio de 2005). (Como se citó en Rojas Báez, 2008)

de valorar lo que se denomina “proyecto de vida” o proyecto existencial. El ejercicio de la libertad nos hace coexistenciales y temporales, esto es, con cualidades que nos permiten vivir en sociedad, tomar nuestras propias decisiones, crear, desarrollarnos, formular planes y valorar lo que es bueno o malo en nuestras vidas (p. 4).

Para el caso de la desaparición forzada de personas, el análisis de daño se centra en las familias de los desaparecidos. Por ejemplo, en el caso de las Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador (2005), la Corte Interamericana consideró que

[...] es propio de la naturaleza humana que toda persona experimente dolor ante el desconocimiento de lo sucedido a un hijo o hermano, máxime cuando se ve agravado por la impotencia ante la falta de las autoridades estatales de emprender una investigación diligente sobre lo sucedido (párr.159).

Según ha establecido la Corte, el sufrimiento ocasionado a la víctima “se extiende a los miembros más íntimos de la familia, en especial a aquellos que estuvieron en contacto afectivo estrecho con la víctima”³¹

Una vez hubo una prospección en base a la declaración dada por alias Jimmy, pero se hallaron otros cuerpos, de una señora y un señor, sin embargo, no eran los de mi padre. Las autoridades muy negligentes en ese sentido porque siempre la excusa es que no hay recursos para llevar al victimario para que indique, que el terreno que ta ta ta, eso fue hace cuatro años, pero no hay ningún resultado. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018)

Esta misma Corte en el caso Loayza Tamayo vs. Perú (1998) estableció que cuando se presume que las violaciones en perjuicio de las víctimas repercuten en sus familiares, se

³¹ Para ampliar información ver: caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 10, párr. 218; Caso 19 Comerciantes, supra nota 15, párr. 249; y Caso Molina Theissen. Reparaciones, supra nota 4, párr. 48.

constituyen entonces, en “parte lesionada” aun sin haber sido declarados víctimas directas en la etapa de fondo³².

Igualmente, en el Caso 19 Comerciantes vs. Colombia (2004) se declararon violados los derechos de los artículos 5, 8 y 25 de la Convención, que hacen referencia a la integridad personal, a la protección judicial o a las garantías judiciales, en perjuicio de los familiares que guardaban un vínculo estrecho con las víctimas, siendo estas vinculadas a los procesos judiciales como “parte lesionada”, en tanto víctimas indirectas de transgresiones a los derechos de sus familiares.

[...] quiero encontrar el cuerpo, quiero que toda mi familia de verdad vivamos un luto real porque hemos estado enmascarando el dolor, lo hemos estado mutando que realmente no llenan interiormente. Entonces, digamos que personalmente para llegar a una aceptación. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018)

En el Caso Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, como lo ha hecho en otras oportunidades, en relación con los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, la Corte señaló que:

[...] éstos pueden ser, a su vez, víctimas. En el caso sub judice, la vulneración del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de [...] es consecuencia directa de la detención ilegal y arbitraria de éstos [...]; de los malos tratos y torturas sufridos por éstos durante su detención, y de la muerte [...]. Todo lo señalado generó en sus familiares inmediatos sufrimientos e impotencia ante las autoridades estatales, razón por la cual, en este caso, los familiares pueden ser considerados víctimas de tratos crueles, inhumanos y

³² Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 142, y Caso Cesti Hurtado vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de mayo de 2001. Serie C No. 78, párr. 54.

degradantes, en violación del artículo 5 de la Convención Americana (Calderón, 2015, p. 32)

Al respecto Calderón (2015) refiere

En reiteradas oportunidades la Corte ha considerado que se ha violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas directas, por el sufrimiento adicional que estos familiares han padecido como consecuencia de las circunstancias generadas por las violaciones perpetradas contra las víctimas directas y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos, por ejemplo, respecto a la búsqueda de las víctimas o sus restos, así como respecto al trato dado a estos últimos (p. 35)³³

A Jimmy lo citaron porque mi tía sí tenía claro quién era, cuando lo estaban judicializando llego mi tía e informó que él tenía responsabilidad en el crimen contra mi familia, fue voluntario, él se declaró en sentencia anticipada, él lo hizo creo yo que fue por el beneficio, él acepto los cargos del crimen de mi padre por la denuncia de mi tía. Sobre el lugar donde enterraron a mi padre, él cuenta que fue en medio de unos árboles, dice que el hueco es pando 2 metros de profundidad [...] sin embargo, ahí es donde yo veo como la falta de voluntad del Estado para ir a hacer esa prospección. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018)

Como se hizo referencia en el primer capítulo de este documento, entre las prácticas sistemáticas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se destaca la desaparición forzada como una modalidad delictiva que permitía en alguna medida, ocultar la gravedad de los delitos por ellos cometidos, así como cualquier evidencia que pudiera ligarlos a los miembros de estos grupos como los responsables. Sin embargo, y en el desarrollo de

³³ Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párrs. 210 y 232.

procesos de justicia transicional que han tenido lugar en el país, como es el caso del proceso de justicia y paz, fue posible que aquellas personas que fueron víctimas de los hechos de violencia pudieran acceder a mecanismos que pretendían garantizar el acceso a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.

Aunque uno de los pilares fundamentales del proceso de justicia y paz era el esclarecimiento de la verdad, y que no exista impunidad para los responsables de los hechos violatorios de derechos humanos, como se ha podido ver en el caso concreto, esta situación no se ha presentado. Tal y como lo ha manifestado la hija del señor William Murat Martínez, desaparecido en el municipio de Cabuyaro (Meta), aunque existe certeza sobre el destino de su papá, de acuerdo con lo relatado por el desmovilizado de las AUC, quien declaró que el señor Murat Martínez fue asesinado y sepultado en una fosa común, no ha sido posible dar con el paradero de los restos.

De ahí que la Corte también haya iniciado con la observancia, interpretación y aplicación en su jurisprudencia de lo relacionado con el daño inmaterial, siendo el que más relevancia ha cobrado en los casos de desaparición forzada. Esta ha establecido que el “Daño Inmaterial” comprende “

[...] tanto los sufrimientos y las aflicciones causadas a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia”³⁴.

[...] ahora que crecimos es más bien las incógnitas, es más bien [...] como despertar, como ya entrar a este mundo a preguntarse, yo por qué tuve que pasar tantas cosas, mi mamá nos llevaba a vivir de un lado a otro, porque no era estable, no ganaba muy bien tampoco,

³⁴ Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Reparaciones y Costas, op. cit., párr. 84, y Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, op. cit., nota 275.

porque era un salario mínimo, vivíamos con mi abuela, entonces ella tenía cinco bocas que alimentar, sola, completamente sola. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.2, 29 de junio, 2019)

Como se citó en Rojas (2007), la Corte Interamericana entiende que el daño moral o inmaterial “puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, y el menoscabo de valores muy significativos para las personas, como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia” (p. 109).

Además de lo anterior, se considera que uno de los elementos indispensables del daño y por ende su reparación, consiste en el responsable de este; el que causa con su acción u omisión un daño. En el caso de las violaciones a los derechos humanos la responsabilidad recae sobre el Estado (Calderón, 2005b, p. 5). A raíz de las declaraciones internacionales, ha surgido el concepto de responsabilidad internacional por parte del Estado. Es por ello por lo que la esencia del Derecho Internacional Público consiste en que este tiene obligación de cumplir con sus compromisos internacionales.

En el caso objeto de la investigación fue posible determinar a las víctimas, teniendo en cuenta la identificación de los daños sufridos, la permanencia en el tiempo de estos, y que aún no ha sido posible la recuperación, identificación y entrega de los restos del señor William Murat Martínez, situación que ocasiona en la familia de la víctima afectaciones de tipo material e inmaterial. Según lo expresado por Calderón (2015, p. 36), en lo que atañe al carácter inmaterial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reparado daños en las esferas moral, psicológica, física, del proyecto de vida y colectiva o social; mientras que el

daño material incluye daño emergente, lucro cesante, daño al patrimonio familiar y reintegro de costas y gastos.

Después de que él desapareció mi mamá tuvo que empezar a trabajar para sostenernos, mi mamá no sabía hacer mucho, pero consiguió un empleo con el Estado haciendo oficios varios, trabajó en Idiprom. Nos cuida mi abuela, digamos que mala vida no, vivíamos con lo necesario y estábamos felices, pero a la vez se sentía como el vacío, siempre va a estar ahí como el huequito. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.2, 29 de junio, 2019)

En consecuencia, con lo anterior, el artículo 63.1 de la CADH dispone que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados, y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. La jurisprudencia actual de la Corte entiende que la “parte lesionada” es aquella a quien se le viola un derecho consagrado en la Convención y por ende a quien se le debe reparar. Acorde con la jurisprudencia actual, toda víctima declarada en cada caso es parte lesionada y, por ende, beneficiaria de la reparación.

Yo me imagino que mi vida, o la vida de mi familia, mi mamá, hubiéramos tenido una casa antes de tener que recorrer todos los barrios de Bogotá para poder vivir, hubiéramos tenido una estabilidad de vivienda, una estabilidad económica, educación superior ya no tan tarde, hasta ahorita yo voy a empezar mi educación en universidad, pero si él hubiera estado es fijo que yo hubiera podido ingresar antes. Digamos que lo mío no era falta de iniciativa, porque el que quiere estudiar estudia, pero las necesidades son algo que no dan espera, entonces yo pensaba, ayudar a mi mamá. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.2, 29 de junio, 2019)

La Corte IDH ha definido “la pérdida de ingresos aplicando un criterio de compensación que comprende los ingresos que habría percibido la persona durante su vida probable. Con base en tal criterio se establece la pérdida de ingresos en casos en los que la persona ha sido ejecutada extrajudicialmente o ha sido víctima de desaparición forzada. La Corte establece

que a falta de información precisa sobre los ingresos reales de la(s) víctima(s), debe tomar como base el salario mínimo correspondiente en el país”. En caso de víctimas sobrevivientes, el cálculo se hace sobre el tiempo que la víctima permaneció sin laborar como consecuencia de la violación³⁵.

[...] a mí me quitaron el amor de mi papá, fuera de eso la tranquilidad de mi familia, el estar pensando mi mamá, es que yo. Mi mamá es una guerrera definitivamente, porque ella pensaba todos los días en qué les voy a dar de comer, a nosotras nos tocó fue ayudarla, nosotras estábamos estudiando, colegio público normal, estrato dos, pues nosotros nos tocó ir a pedir comida en las panaderías, en los lichigos, pues de alguna forma teníamos que ayudar a que mi mamá se sintiera mejor, mi mamá estaba muy agobiada en verdad, después muere mi hermano entonces fue como el golpe, de hecho pensamos que mi mamá se iba a morir, definitivamente. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.2, 29 de junio, 2019)

Como se puede apreciar en lo relatado desde la voz de la hija del señor William Murat, y teniendo en cuenta los diferentes pronunciamientos de la CIDH respecto a otros casos de violaciones de los DDHH y el DIH, se debe considerar además del daño material representado en el lucro cesante que se ocasionó a partir de su desaparición, aquel relacionado con los perjuicios económicos que recaen sobre sus familiares, a partir de los hechos de violencia que causaron la vulneración de sus derechos. Es con base en esto que la CIDH ha definido que este tipo de hechos son atribuibles a los Estados y son estos los que deben promover la creación de mecanismos que permitan garantizar a las víctimas el acceso a medidas de reparación integral, entre las que se contemplen aquellas enfocadas a

³⁵ Para ampliar información ver: Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Reparaciones y Costas, op. cit., párr. 49. Caso El Amparo vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C No. 28, párr. 28; Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 205, y Caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71. Como se citó en Calderón, 2015, p. 48.

intervenir sobre el detrimento de la salud física, psíquica y emocional de la familia afectada³⁶.

Sumado a lo anterior, en el caso del señor Murat se puede identificar también el daño causado en la esfera de lo inmaterial, ya que se vio afectado el proyecto de vida de la familia, el cual “se asocia al concepto de realización personal, el poder conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. En rigor, las opciones son la expresión y garantía de la libertad” (Calderón Gamboa, 2005b, p. 10). Al ser una familia que basaba sus dinámicas en las proyecciones y sentido que le daba William, con su trabajo y las relaciones que entablaba, la familia vio afectadas sus experiencias de vida, las actitudes se transformaron y los roles se ajustaron según las nuevas necesidades a las que se vio enfrentada.

En este sentido, la Corte Interamericana ha venido sentando un precedente respecto a este tipo de daño, separándolo del daño moral, y enfocando su análisis en aspectos relacionados con la existencia. Al respecto han manifestado:

El concepto de proyecto de vida tiene un valor esencialmente existencial, atendiéndose a la idea de la realización personal integral. Es decir, en el marco transitorio de la vida, a cada uno cabe proceder a las opciones que le parecen acertadas, en el ejercicio de la plena libertad personal, para alcanzar la realización de sus ideales. La búsqueda de la realización del proyecto de vida devela, pues, un alto valor existencial, capaz de dar sentido a la vida de cada uno (Gutiérrez Soler vs. Colombia, 2005).

[...] mi hermana mayor por ejemplo, que fue la que más alcanzo a convivir con él..., digamos que medio vacías, las tres se nos puede percibir el huequito como bueno y un papá, porque hay situaciones especiales en las que él debió haber estado, que la fiestica de 15, que el primer día de

³⁶ Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Reparaciones y Costas, op. cit.párr. 58.

colegio, que los cumpleaños, que las navidades, pues digamos que esos momentos no son muy gratos, dejaron de ser gratos (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.2, 29 de junio, 2019)

Cabe mencionar que los seres humanos a través del ejercicio de definir un proyecto de vida, procuramos otorgar un sentido a la existencia, siendo cada uno libre de determinar los medios mediante los cuales se va a alcanzarlo. Sin embargo, este se puede ver limitado o terminado debido a circunstancias externas al individuo, como es el caso de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. De ahí que, a través de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea posible ir más allá de la concepción del lucro cesante y el daño emergente, ya que, en su reciente jurisprudencia, se ha empezado a establecer la importancia de la comprensión y alcance del daño frente al proyecto de vida el cual no tiene un carácter económico o patrimonial.

En cuanto a lo económico era lo único que tenía mi mamá, aparte mi mamá tiene un hijo con otro señor que vive en Estados Unidos, tiene una demanda por alimentos porque él nunca le aportó nada a mi hermano, mi papá fue a cobijarlo a él como si fuera propio, eso es muy importante recordar, pues porque llena y mi hermano lo recuerda como su papá, como el papá que estuvo ahí presente. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.2, 29 de junio, 2019)

La Corte ha especificado que corresponde a una noción distinta del lucro cesante y el daño emergente. El Tribunal se refirió sobre el particular en el Caso Loayza Tamayo vs. Perú al establecer que “atiende a la realización integral de la persona afectada según su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse

razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas”³⁷. Por tanto, este concepto se vincula con la realización personal y “se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone [que son] la expresión y garantía de la libertad”³⁸. En ese orden de ideas, su cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de la libertad.

Mi abuelo Elías, cuando mi papá desapareció nos empezó a aportar solo 100.000 por las tres, por los cuatro prácticamente con mi hermano.

Lo que hemos obtenido, el apoyo psicosocial, por ejemplo, lo hemos obtenido es acá, en la Fundación, la Fundación también nos tocaba a veces recurrir a la Fundación por cuestiones económicas ya que mi mamá no daba más. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.2, 29 de junio, 2019)

Calderón (2005a) menciona que en 2003 entrevistó a Luis Alberto Cantoral sobre lo que él consideraba era el daño al proyecto de vida. Al respecto, refirió que era

como matar al cerebro de la persona, amarrarla, como poner una enorme piedra a una plantita que está creciendo y sofocarla. Es una gran frustración; si le robas la ilusión a una persona, le robas las ganas de vivir y hasta el sentido de la vida.

Así mismo, señala que posterior a las sentencias emitidas por la Corte respecto al daño al proyecto de vida, las víctimas continuaron solicitando su reparación, y en muchos de los peritajes psicológicos presentados ante la Corte, hicieron referencia a esta situación (Calderón, 2015, p. 44).

De conformidad con el artículo 94 de la Ley 599 de 2000, y el artículo 11 de la Ley 906 de 2004, el “daño psíquico” está referido al deterioro de las funciones psíquicas, derivado

³⁷ Caso Loayza Tamayo vs. Perú, párr. 147.

³⁸ Caso Loayza Tamayo vs. Perú, párr. 148.

de la ocurrencia de un evento externo sobre el cual puede reclamarse jurídicamente una responsabilidad que origina la obligación de reparar el daño causado. El deber de investigar y sancionar, en cierta forma, se ha caracterizado por tener un componente reparador al daño moral³⁹ (acceso a la verdad) (Calderón, 2015, p. 40).

Mi mamá sí creo que es la que más daño tiene, porque a ella le fue impedido participar en la búsqueda, entonces también hizo como que ella le cogiera mucha rabia a mi abuela Teresa, pero no era una rabia así como de "yo no veo a esa vieja" no, porque al final nos brindaban la mano, porque ella necesitaba participar en la búsqueda, no importa que no se hubieran casado con mi papá, pero eso no importa, era la persona que ella quería. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.2, 29 de junio, 2019)

La CIDH ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables. La Corte recuerda que el derecho a la verdad, del artículo 13 de la Convención Americana, se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención (Masacre de la Rochela vs. Colombia, 2007, párr. 147).

Lo que yo percibo en mi tía es mucha rabia, mucho rencor, ese ha sido como el daño individual de ella, mi abuela antes de morir, que murió de viejita, tuvo una muerte muy digna gracias a Dios, le pidió muchas disculpas a mi mamá, por tanto, por todo lo que la

³⁹ Para ampliar información ver los casos Molina Theissen, Caballero Delgado y Santana, Benavides Cevallos, Castillo Páez, Ivcher Bronstein, "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros), Juan Humberto Sánchez, Comunidad Moiwana, Blanco Romero y otros, Masacres de Ituango y Masacre de las Dos Erres, etc.

hizo pasar. Y entonces, pues bueno, porque ella me contó muchas cosas de la vida personal de mi papá y mi mamá, que al final no me interesaba saber, sin embargo, eso me hizo darme cuenta de cómo son en realidad o lo que ha cambiado, duele, pero hay que culpar sino al culpable, solo al culpable (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.2, 29 de junio, 2019)

Beristaín (2007) hace referencia a que el impacto de las violaciones de derechos humanos puede verse desde tres perspectivas: trauma, crisis y duelo. La primera, entendida como aquella afectación que puede ocasionar una secuela en la persona que vive el hecho victimizante; la segunda, como las circunstancias a las que los seres humanos nos vemos expuestos diariamente y sobre las cuales se deben poner en marcha los recursos personales o colectivos con los que cuenta cada uno para afrontarlas, y por último, aquellas situaciones en las que enfrentamos las pérdidas de seres queridos o vínculos significativos (p. 12).

Me he acercado a la música, a la lectura, a la poesía, me gusta instruir, duré un tiempo instruyendo a niños de una banda marcial, niños pequeños, eso es como una motivación interna, acá estoy tocando una realidad que no la toco en otras instancias pero que siempre esta ahí, todo me va a recordar a mi padre, todo lo que hago y que supuestamente me va a permitir estar concentrada en algo diferente, pero todo me recuerda a mi padre a pesar que de no compartí con él. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018)

Con el fin de comprender los impactos ocasionados a nivel individual y familiar que se generaron a partir de la desaparición forzada del señor William Murat, sería necesario tener en cuenta la situación que desencadenó el padecimiento, así como la respuesta emocional y conductual que la misma provocó, siendo esta atribuible a una o varias de las categorías definidas con respecto al daño. Sin embargo, en procesos judiciales se deben considerar también, aquellos factores protectores con que cuentan las personas para afrontar las

experiencias traumáticas, con el fin de garantizar una mayor participación y que las mismas puedan convertirse en agentes de cambio positivos no solo para sí mismos sino también para la sociedad.

[...] vine a la fundación (Fundación Nydia Erika Bautista) y desde 2013 me emplearon, y quise empoderarme en la búsqueda de la verdad, yo quiero la verdad, yo quiero un luto, quiero enterrar a mi padre, he tenido sueños muy fuertes, el único recuerdo que tengo de mi padre es una fotografía, yo lo sueño con esa imagen (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018)

Estar acá en la Fundación me ha llevado a no pensar solo en mí, yo desde que estoy en la Fundación me ha encantado mucho generalizar, y es muy importante, porque es algo que nos ha marcado a todos, yo diría que ojalá después de que..., estas entidades tienen un tiempo, ojalá puedan ampliar ese tiempo, porque yo no veo que hayan las garantías del que puedan brindarle esa verdad a todas las víctimas. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.2, 29 de junio, 2019)

A partir de lo expuesto anteriormente, se reafirma la importancia de reconocer la capacidad que exhiben los seres humanos ante las situaciones adversas, sobreponiéndose a las dificultades y enfrentando situaciones traumáticas. A través de esta capacidad, conocida como Resiliencia, las personas buscan mantener el control de la situación desarrollando habilidades para sí mismos o los demás como una forma de afrontar los hechos, fortaleciendo la cohesión familiar y colectiva. De ahí que sea necesario tener en cuenta que, al momento de abordar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, no solo se debe buscar identificar el impacto de dichas violaciones, sino también conocer las capacidades y habilidades con que cuenta cada una para hacerle frente.

Capítulo 6. Acceso A La Reparación

A lo largo de la historia, y con la continua evolución de los sistemas legales tanto a nivel internacional como nacional, se evidenció que la prioridad en procesos de índole penal ya no radicaba exclusivamente en la sanción del autor de una conducta criminal que atentó contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, sino también en la reparación de las víctimas de dichas violaciones.

Al respecto, la Federación Internacional por los Derechos Humanos menciona que las víctimas no podían solicitar reparaciones ante los tribunales internacionales de la antigua Yugoslavia y de Rwanda (TPIY y TPIR), y los jueces sólo podían dictar órdenes de restitución de la propiedad:

Los artículos 24(3) del Estatuto del TPIY y el 23(3) del Estatuto del TPIR establecen respectivamente que la Corte está autorizada a emitir una orden para devolver “cualquier propiedad o recaudación adquirida mediante una conducta penal (...) a los respectivos dueños (Federación Internacional por los Derechos Humanos, 2007, p. 3).

Sobre lo anterior, Calderón (2015) señala que, en años recientes, la comunidad internacional ha promovido la reformulación del alcance de la reparación del daño tradicional, realizada mediante compensación económica, para llegar al concepto de reparación integral, que configura un remedio más amplio para subsanar los daños de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Así mismo, destaca que en diferentes pronunciamientos de tribunales internacionales tales como la Corte Permanente de Justicia, El Tribunal Europeo, la Comisión Africana y la CIDH, se incorporó en sus decisiones, como principio de derecho internacional, la reparación integral, para todos los casos en que se haya ocasionado un daño a partir de la violación de una obligación internacional (p. 19)

A partir de la expedición y entrada en vigencia del Estatuto de Roma dicha situación cambió. El artículo 75 del Estatuto dispone que la Corte podrá dictar órdenes de reparación, a personas condenadas, en beneficio de las víctimas. No obstante, la Corte Penal Internacional (CPI) no está facultada para dictar órdenes de reparación en contra de Estados. El régimen de reparación es independiente de la participación de las víctimas en los procedimientos. Las víctimas no tienen que participar en la fase preliminar y/o de primera instancia de los procedimientos para poder solicitar y/o ser elegibles para obtener reparación (FIDH, 2007, p. 5).

Es así, como se da lugar a la aparición de instrumentos internacionales que reglamentan lo relacionado con el derecho de las víctimas a acceder a la reparación integral. Fue la Asamblea General de las Naciones Unidas de Derechos Humanos quien emitió la Resolución No. 60/147 de 2005, a través de la cual se establecen principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones, manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, a interponer recursos y obtener reparaciones.

El principio general en el derecho internacional es que “la reparación debe, en la medida de lo posible, eliminar todas las consecuencias del acto ilegal y restablecer la situación que, con mayor probabilidad, hubiese existido si el acto no se hubiere cometido” (Como se citó en FIDH, 2007, p. 7)⁴⁰. La reparación debe ser proporcional al daño sufrido. Las distintas modalidades de reparación definidas bajo el derecho internacional incluyen: la restitución, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.

⁴⁰ Véase: Corte Permanente de Justicia Internacional, Caso de la Fábrica Chorow, méritos, 1928, P.C.I.J., Sr.A, Nro. 17 (13 de septiembre) pág. 47 disponible en: <http://www.icj-cij.org/pcij/index.php?p1=9&p2=1&p3=0&co=A17>.

Con base en lo anterior, y de acuerdo con lo establecido por la Resolución No. 60/147 de 2005, la reparación debe ser

[...] adecuada, efectiva y rápida [...] remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido, [...] plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición [...]

19. La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes (Naciones Unidas. Derechos Humanos, 2005).

En el Sistema Interamericano el concepto de “Reparación Integral” se toma del artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sobre este, la Corte IDH ha indicado que esta disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de este por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación⁴¹.

De igual forma, así lo especifica la Resolución No. 60/147 de 2005:

⁴¹ Para ampliar información ver: Caso Cesti Hurtado. Reparaciones, supra nota 2, párr. 35; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 62; y Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, supra nota 2, párr. 78.

20. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:

- a) El daño físico o mental;
- b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;
- c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
- d) Los perjuicios morales;
- e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.

21. La rehabilitación ha de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales.

22. La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes:

- a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones;
- b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;
- c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad

[...]

23. Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención:

- a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad;
- b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad;
- c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial;
- d) [...]
- h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan. (Naciones Unidas. Derechos Humanos, 2005).

Así pues, cabe reiterar que todo acto ilícito que conlleve a la violación de derechos humanos genera la responsabilidad de resarcir el daño ocasionado tanto a la víctima directa como a sus familiares y a sus comunidades. De ahí que sea deber de los Estados el adoptar lo consagrado en materia de reparaciones a nivel internacional, en el ordenamiento jurídico interno, especialmente en casos de graves violaciones.

Lo que hemos obtenido, el apoyo psicosocial, por ejemplo, lo hemos obtenido es acá, en la Fundación [...] Nos tocaba recurrir a la Fundación en tiempos así reduros que mi mami definitivamente no daba, más o menos en el año... no recuerdo, creo que fue el 14 o 13, que mi hermano con mi mamá empezaron a hacer los papeles para obtener una vivienda propia, pues eso se dio, se dio un año después y fue una alegría pues tremenda. Estuvimos a punto de perder la casa porque no teníamos para la cuota y entonces mi hermano murió, y él era uno de los propietarios así la deuda quedó a salvo, es algo triste, no sabemos si es algo triste, no nos explicamos, tal vez era su misión dejarnos bien, porque ahí se ve como el cambio de roles, mi hermano empezó a ser nuestro papá, mi papá fue el papá de él, mi papá

desapareció y ahora mi hermano empezó como a adquirir esa responsabilidad de protegernos y mi mamá pues obvio, mamá y papá. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.2, 29 de junio, 2019)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la constitución política de Colombia, es obligación del Estado Colombiano garantizar el adecuado cumplimiento de todas y cada una de las medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, por el accionar de los diferentes actores que hacen parte de este.

Respecto al caso concreto, en cuanto al crimen de desaparición forzada, y una vez identificados los daños ocasionados tanto al señor William Murat como a su familia, se debe también determinar las medidas que garanticen un adecuado restablecimiento de los derechos vulnerados. En este orden de ideas, resulta pertinente mencionar también, el artículo 93 de la Constitución, el cual hace referencia al Bloque de Constitucionalidad, compuesto por aquellas normas y principios que, sin estar formalmente en el texto de la Constitución, comparten su misma fuerza normativa, puesto que la propia constitución así lo ordena (Uprimny, 2004, p.26). Estas normas se refieren a los tratados internacionales sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, las declaraciones o principios para la promoción y protección de los derechos humanos, y la jurisprudencia de algunas cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Teniendo en cuenta que la Desaparición Forzada de personas es considerada un crimen de lesa humanidad, según lo establecido en el Estatuto de Roma (1998), es importante mencionar que este, además de determinar las reglas de procedimiento y pruebas acerca de la persecución, judicialización y condena de los máximos responsables, también busca garantizar que las víctimas accedan a la reparación. En el Art. 79 del Estatuto, por ejemplo,

se hace referencia a la figura del Fondo Fiduciario, el cual tiene como principal función facilitar la implementación de las medidas de reparación a víctimas de los crímenes que se encuentran bajo la competencia de la Corte⁴².

En este orden de ideas, Jara (2013) menciona que en el caso de la sentencia *Fiscalía v. Lubanga Dyilo*, la CPI constata que el condenado “ha sido declarado indigente, no habiéndole sido identificados activos o propiedades para los propósitos de la reparación” (p.123), pudiendo por tanto contribuir únicamente por medio de reparaciones no monetarias:

Por lo anterior es el Fondo Fiduciario el llamado a actuar, aunque, ya no en forma supletoria, sino exclusiva. En este sentido, el Fondo Fiduciario ha indicado que las reparaciones tenderán a ser de naturaleza colectiva, de acuerdo con la Regulación 56 de las Regulaciones del Fondo Fiduciario. (Jara, 2013, p. 125)

Werle (2011) menciona que la Sala de Primera Instancia puede además de imponer penas, ordenar que se otorgue una reparación a la víctima, cuyo pago debe ser asumido por el condenado. Las actuaciones de reparación constituyen una fase del procedimiento separada, que tiene lugar a continuación de la condena. El secretario de la Corte Penal Internacional debe informar a las víctimas que no están tomando parte en el juicio acerca de las actuaciones de reparación, para así permitirles proteger sus intereses⁴³.

Sin embargo, la CPI establece que tanto víctimas individuales como grupos de víctimas pueden solicitar y recibir reparaciones justificándolo en la Regla 97(1) del estatuto, el carácter individual o colectivo no constituye características mutuamente excluyentes, sino

⁴² Para ampliar información ver: regla 90.2 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional (CPI).

⁴³ Para ampliar información ver: Art. 76 y ss. del Estatuto de la CPI.

que pueden ser concurrentes, según ha expresado la jurisprudencia interamericana. Así se establece expresamente en la sentencia Lubanga Dyilo, “[l]a Corte puede considerar la provisión de servicios médicos (incluyendo cuidado psiquiátrico y psicológico) junto con asistencia en cuanto a rehabilitación general, viviendas, educación y entrenamiento” (Jara, 2013, p. 121).

De modo semejante, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los diferentes pronunciamientos de la CIDH en materia de reparación integral se han convertido en referente internacional y nacional al momento de definir las medidas de reparación con posterioridad a la definición de una condena. En el caso Blake vs. Guatemala (1999), la Corte ordena investigar los hechos del caso, identificar y sancionar a los responsables, adoptar las disposiciones en su derecho interno que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obligación, reintegrar los gastos médicos y los gastos de carácter extrajudicial en los que hayan incurrido los familiares del desaparecido, así como también reintegrar los gastos efectuados en la tramitación del caso ante el sistema interamericano y el daño moral.

Con base en lo discutido hasta aquí, es posible inferir que los hechos de violencia ocurridos en el país en el marco del conflicto armado se han configurado en su gran mayoría, por no decir en su totalidad, como crímenes de lesa humanidad, toda vez que la ocurrencia de estos hechos se dio como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, y con conocimiento de este. Tal situación se presentó en el departamento del Meta, en el cual siempre ha existido presencia de los diferentes actores armados que han hecho parte del conflicto, entre los cuales se encuentra el bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

De ahí que no sea solo obligación de los máximos responsables el resarcir los derechos vulnerados, sino también del Estado por su omisión en la búsqueda de mecanismos y/o alternativas que permitieran la prevención en la ocurrencia de hechos de violencia contra la población civil. Este es el caso de las conductas ilícitas desplegadas por el bloque Héroes de los Llanos de las AUC, en el departamento del Meta, las cuales ocasionaron innumerables violaciones contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, como la desaparición del señor William Murat, en la que, aunque se tenga certeza sobre su destino, no ha sido posible garantizar una adecuada reparación integral para sus familiares.

Por su parte, Padilla (1995) menciona que

La Corte (Interamericana de Derechos Humanos) ha adoptado el principio de integralidad que debe regir la reparación del daño generado por la violación de una obligación internacional. Bajo dicho principio, se debe restablecer la situación anterior a la producción del daño, reparar las consecuencias derivadas y pagar una indemnización como compensación de los daños patrimoniales y extra-patrimoniales (Como se citó en Woolcott Oyague y Monje Mayorca, 2018).

Ahora bien, como se ha venido resaltando a lo largo del trabajo, los hechos que componen el caso en particular ocurrieron en el marco del conflicto armado, se atribuyeron a un grupo armado al margen de la ley, se definieron a los responsables, se impuso una sanción, y se ordenaron unas medidas de reparación consagradas en el marco normativo nacional vigente (Ley 975 de 2005 y Ley 1448 de 2011). No obstante, tomando además en consideración el relato de la hija del señor Murat, se infiere que las medidas de reparación integral contempladas en dichas normas no han tenido un adecuado cumplimiento.

En cuanto a las reparaciones hubo una indemnización a mi hermano, cumplimos los 18, nos llamaron, se comunicaron conmigo, porque cuando me vinculé a la Fundación de una firmé el poder a la abogada para tener la representación civil en el caso, enviamos las actualizaciones de los documentos. También lo que acredita a la señora Leonor como esposa legal de mi papá, también agregue unas declaraciones de terceros que me fueron solicitadas y ya, eso durante tres días, a los dos días me respondieron el correo diciendo que los papeles están correctos, algo así y ya, hasta ahí no he vuelto a saber nada, la comunicación con el encargado de mi caso en la unidad es nula. (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.2, 29 de junio, 2019)

Héctor Faúndez concuerda con la línea trazada por un sector de la doctrina del derecho civil, al precisar que existe una diferencia entre la reparación y la indemnización en términos de género y especie respectivamente. La indemnización, correspondería a una noción específica que se caracteriza por su carácter pecuniario. Precisa Faúndez (1999) que “[...] la función de la Corte no consiste únicamente en determinar el monto de la indemnización a pagar, sino que, sobre todo, en indicar las medidas concretas que debe adoptar el Estado infractor para *reparar* las consecuencias de su acto ilícito” (p. 497). En la misma línea, hace énfasis en que “Mientras las medidas reparadoras persiguen fines muy amplios, pudiendo ser el reflejo del carácter objetivo de las obligaciones asumidas por el Estado, en cuanto obligaciones *erga omnes*, que interesan a todos, la indemnización satisface únicamente el interés particular del reclamante (p. 500).

En la Sentencia de reparaciones de la Fiscalía v. Lubanga Dyilo, la Corte Penal Internacional establece expresamente “[l]as reparaciones deben asegurar, si fuera posible, la reconciliación entre el condenado y las víctimas de los crímenes y comunidades afectadas” (Jara, 2013, p. 118). También destaca que

[...] el limitado rango de los cargos presentados por la Fiscalía contra el Sr. Lubanga limita las categorías de víctimas que han participado en este caso. Proviene mayormente del mismo grupo étnico, y no representan necesariamente a todos quienes sufrieron crímenes cometidos durante el conflicto relevante en Ituri. Esta situación podría aumentar el riesgo de resentimiento de parte de otras víctimas, y la re estigmatización de antiguos niños soldados dentro de sus comunidades (párrs. 187-193).

Ahorita por ejemplo van a realizar unos encuentros, que me pareció tenaz que nos dijeran, que nos hicieran esta pregunta, como, qué opinan si los victimarios están con ustedes como público también dentro de esos encuentros, o sea me pareció muy mal, porque el espacio es nuestro, el espacio es para nosotros, aparte los riesgos que se corren ahí, sería tremendo, y digamos que tal yo me encontrara a Jimmy, por ejemplo.

Digamos que sí debe haber un espacio de reconciliación, digamos que es muy muy importante reconciliarnos, sin embargo, es que el daño está hecho y los sentimientos no..., imagínate parar de sentir, vale lo disculpo, pero al final, uno no va a quedar satisfecho disculpando a una persona que le dañó su estructura familiar, el amor, que le quitó el amor, porque a mí me quitaron el amor de mi papá (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.2, 29 de junio, 2019).

Como se puede evidenciar, a partir de lo expuesto por Jara (2013), es posible identificar que la reparación ordenada por la Corte Penal Internacional u otros tribunales internacionales se convierte únicamente en una aspiración que posiblemente no pueda configurarse como un mecanismo idóneo para el restablecimiento de los derechos de las víctimas, al no garantizarse el adecuado cumplimiento.

Sin embargo, y como lo menciona Calderón (2015), la evolución del concepto de reparación integral obedece en gran medida al desarrollo que ha llevado a cabo la Corte IDH. Esta ha destacado tres aspectos fundamentales: el reconocimiento de afectaciones en

perjuicio de víctimas directas e indirectas, la visión multidimensional de los daños que repercuten en la persona humana o colectivos, y la integralidad de las medidas de reparación que buscan restablecer la situación jurídica infringida y en especial garantizar la no repetición de los hechos. Adicional a esto, destaca que diversos países han adoptado el sistema de reparación integral de la Corte en su legislación interna, ampliando el efecto reparador al que las víctimas tienen derecho (p. 94)

En consecuencia, en casos como el del señor Murat, es necesario tener en cuenta dentro de las medidas que se deben implementar, todas las acciones tendientes a la búsqueda y recuperación de los restos de las personas desaparecidas, empleando todos los medios técnicos y científicos posibles y tomando en cuenta las normas internacionales pertinentes en la materia. También se debe entregar los restos mortales a sus familiares y cubrir los gastos de entierro (Corte IDH, 2005)⁴⁴.

Por su parte, las medidas de rehabilitación buscan disminuir las afectaciones físicas y emocionales causadas a partir de graves violaciones a los DDHH y el DIH, y tienen que ver con atención médica, psicológica, psiquiátrica, asesoría y/o acompañamiento judicial, social o de otra índole. Lo anterior aplica tanto para las víctimas directas como para los familiares, vislumbrando el daño moral ocasionado por la gravedad de los hechos y la intensidad del sufrimiento que constituyen los eventos de desaparición forzada, en la medida en que los familiares no pueden realizar una adecuada elaboración del duelo.

Mi hermana María José que es mi melliza, ella siempre ha tenido como... no sé si después de eso, o después ya de entrar en razón, como, bueno, acá falta alguien, problemas como de aprendizaje, y problemas..., es muy dispersa, es muy muy dispersa, y mira que ella no llora,

⁴⁴ Para ampliar información ver: Caso Masacre de Mapiripán vs Colombia. 2005

ella puede estar pasando por una situación crítica y mira que ella no llora, yo en cambio soy la parte contraria, yo si lloro, yo soy muy chillona, y yo lloro y no puedo detenerme (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.2, 29 de junio, 2019).

El estándar fijado determina que se debe brindar, por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado a las víctimas, previa manifestación de su consentimiento y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de medicamentos. Al proveer el tratamiento psicológico, se deben considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, brindando tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluación individual (Corte IDH, 2005)⁴⁵.

Como se ha venido haciendo referencia, todo hecho violatorio de los derechos humanos que ocasione el perjuicio de la víctima directa como de sus familiares, implica la obligación de repararlo, pretendiendo el restablecimiento de aquellos derechos vulnerados. Sobre esto sería importante tener en cuenta la decisión de la Corte Interamericana en el caso 19 comerciantes vs. Colombia y la aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana. La Corte encontró al Estado responsable de la violación de los artículos 4, 5 y 7 en perjuicio de los 19 comerciantes y de los artículos 8 y 25 en perjuicio también de los 19 comerciantes como de sus familiares, siendo entonces obligación del Estado diseñar e implementar medidas de reparación tendientes a subsanar los efectos de las violaciones y que exista una correcta relación entre las mismas.

Con base en lo anterior y según lo establecido en la normatividad internacional, para el caso concreto tratado en esta investigación, los hechos de violencia ocasionaron una vulneración del derecho a la vida, a la libertad, a la integridad personal, a las garantías

⁴⁵ Para ampliar información ver: Corte IDH, Caso Masacre de Mapiripán vs Colombia. 2005

judiciales y a la protección judicial, tanto del señor William Murat como de sus familiares. Es entonces obligación de los responsables de los hechos, como del Estado, definir los mecanismos más idóneos que garanticen una adecuada reparación integral sobre los daños materiales e inmateriales que se ocasionaron a partir de la desaparición forzada de la víctima directa.

En principio nosotras nos dimos cuenta, nos informaron que podíamos ser reparadas económicamente cuando éramos menores de edad, nos dijeron que tan pronto tuviéramos las cédulas podíamos ir a la unidad y actualizar los datos y que después de eso tendríamos que esperar seis meses, eso fue lo que nos informaron, nos dijeron que para ser reparadas. Hasta el momento no hemos sido reparadas, hasta el momento quienes han sido reparadas han sido la esposa de mi padre y mi hermano mayor William, nosotras no, mi mamá si en algunas ocasiones, en algunas declaraciones mi abuela la nombró, sin embargo, ella no hace parte del núcleo y no ha sido reparada. La verdad no hemos acudido a otras medidas de reparación, sí nos ofrecieron que podríamos domiciliarnos en otro país, en ese momento yo ya estaba grande y decidí que no, eso es huirle a la verdad, si yo me voy a otro país no quiero que el caso de mi papá quede así, por eso no acudimos a esa opción, hemos sido muy pacientes y personalmente creo que fue una buena decisión, si todos se fueran a otro país, ¿dónde queda la verdad? (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.1, 13 de septiembre, 2018)

En el caso colombiano como se ha podido evidenciar, aunque el marco normativo en materia de justicia transicional y reparación, atención y asistencia a víctimas contempla los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, esto se ha limitado exclusivamente a la indemnización como forma de reparar el daño sufrido, desconociendo medidas como la rehabilitación, la restitución, la satisfacción y las garantías de no repetición.

A lo largo del relato de María del Pilar Murat, es posible identificar una sensación de incumplimiento por parte del Estado al no garantizar la participación de la totalidad de los familiares de la víctima directa, así como la no inclusión en programas de atención y asistencia. Esto ha hecho necesario recurrir a entidades no gubernamentales, con el fin de encontrar una manera de evitar que el hecho permanezca en la impunidad, conocer el paradero de la persona desaparecida, propender que se adelante una investigación efectiva que permita esclarecer los hechos y determinar las razones que llevaron a la comisión del ilícito, así como la individualización de todos los responsables.

[...] ahí si veo una negligencia tenaz por parte del fiscal porque él no lanzó una citación a mi hermana, yo dejé datos de contacto, yo hice todo lo que está a mi alcance, para que mi hermana mayor acudiera a rendir declaración, lo que pasa es que ella vive en Girardot y necesita eso para un permiso del trabajo (M. P. Murat Martínez, relato de vida No.2, 29 de junio, 2019).

Sobre lo anterior cabe resaltar las intervenciones del Ministerio Público durante la etapa judicial del proceso de Justicia y Paz, mencionando que, en varios de los cargos formulados por la fiscalía, se desconocen las causas que motivaron los hechos, por lo tanto, no se cuenta con información en el proceso que permita concluir que los mismos fueron ejecutados con ocasión del conflicto armado.

Así mismo, esta institución considera que la situación antes descrita resulta nociva para las víctimas, a las que no les interesa solo el reconocimiento de los derechos a los cuales haya lugar, sino también conocer el porqué, el cómo y el lugar en el que se cometieron los hechos delictivos. Por lo tanto, a su juicio, algunos hechos traídos a colación por la Fiscalía carecen de los elementos suficientes para satisfacer los postulados de verdad y justicia para

las personas que fueron afectadas con estas conductas punibles (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 2014, p. 1811).

Por último, y de acuerdo con lo relatado por María del Pilar Murat, es posible evidenciar que en las diferentes etapas de los procesos tanto de justicia ordinaria, como transicional, estos han sido excluyentes respecto de la totalidad de los familiares de la víctima directa, ya que el acceso al derecho a la verdad se ha dado de manera limitada, a pesar de conocer la comisión del hecho y el destino del señor William Murat, no ha sido posible la recuperación de los restos, individualizar a todos los responsables y esclarecer las razones que motivaron su desaparición.

Conclusiones

La problemática del conflicto armado por la que ha atravesado desde hace más de 60 años el país tiene entre sus múltiples causas, la debilidad institucional, la escasa o nula presencia estatal en algunas zonas del país, la desigualdad social, la dificultad para acceder a derechos básicos como la salud y la educación, las economías ilegales, la presencia y creación de grupos armados ilegales y las confrontaciones armadas. Estas situaciones ocasionaron hechos de graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, evidenciando la imperiosa necesidad de promover la creación de mecanismos y acciones concretas que permitieran su aplicación, protección y restablecimiento a través de procesos de justicia transicional.

La implementación de estos procesos como alternativas para resolver la problemática histórica del conflicto armado en Colombia, ha representado un laboratorio en temas de justicia. Sin embargo, el reconocimiento y postulación en el marco normativo de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación no evidencia un cumplimiento de las obligaciones internacionales que adquirió el Estado Colombiano con la suscripción de Tratados Internacionales, como la Convención Americana. La mera mención en las disposiciones legales vigentes no garantiza su cumplimiento.

Los procesos que se han promovido a través de la Ley 975 de 2005 y la Ley 1448 de 2011 no han dispuesto los elementos e instrumentos para la materialización de los derechos, especialmente del derecho a la verdad, el cual se ha visto profundamente afectado. En el caso concreto objeto del proyecto, como en muchos otros, no se conocieron los motivos que llevaron a la comisión de los delitos, ni se llegó a un señalamiento de los principales

responsables, por el contrario, el proceso de justicia y paz permitió que injustificadas acciones violatorias de los derechos humanos se tramitaran favorablemente para los actores armados ilegales. Además, que las esperadas condiciones para la transición del modelo social imperante no se realizaran, continuando con un esquema social donde impera la impunidad que deslegitima al Estado y sus instituciones.

Los hechos de violencia ocurridos en el departamento del Meta, con ocasión del conflicto armado y por el accionar del bloque Héroes de los llanos de las AUC, tuvieron lugar debido a la aquiescencia del Estado. Este hecho se reafirma con las declaraciones de exjefes paramilitares, en las cuales hacen referencia a la colaboración por parte de agentes estatales, quienes estaban dispuestos a omitir el desarrollo de sus competencias con el fin de que dichos grupos armados contrarrestaran el accionar de grupos de guerrilla que hacían presencia en la zona. La poca o nula presencia estatal fue además el escenario propicio para hacer posible el accionar de los grupos armados ilegales no solo en esta región sino en todo el país.

La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en instrumentos internacionales tales como la Convención Americana de Derechos Humanos. Entre estos se puede mencionar el derecho a la libertad, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a no ser sometido a tortura u otro trato cruel o degradante, y además viola o constituye una grave amenaza al derecho a la vida. Con el fin de evitar su comisión y realizar una intervención sobre los casos en que ha ocurrido, se ha dado lugar a la creación de normas internacionales, las cuales han sido adoptadas por el Estado Colombiano. Además, por medio del Estatuto de Roma se ha definido que al ser una práctica

generalizada y sistemática se constituye en un delito de lesa humanidad. De ahí que la desaparición forzada del señor William Murat sea considerada como tal, en tanto ocasionó daños materiales e inmateriales a nivel individual y familiar.

A pesar de existir certeza sobre el destino del señor Murat Sánchez, posterior a su desaparición forzada, teniendo en cuenta la confesión por parte de su perpetrador en el marco de la Ley de Justicia y Paz, aún persisten los interrogantes acerca de las circunstancias que rodearon el hecho. Esto ha generado entre los familiares de la víctima directa un alto grado de insatisfacción tanto hacia los procesos judiciales adelantados, como frente a la respuesta estatal la cual es percibida como insuficiente. Lo anterior evidencia que no existe una adecuada implementación de los estándares internacionales respecto de las medidas de reparación integral.

Si bien en Colombia se ha dado lugar a reformas legales a través de las cuales se pretende garantizar la protección de los Derechos Humanos, su implementación no representa un mecanismo idóneo para satisfacción de la población civil que ha sido víctima de una problemática de conflicto armado, por la que ha atravesado el país desde hace más de 60 años. Aunque existen sentencias a través de las cuales se impone una condena a los responsables, continúan los interrogantes acerca de las razones que llevaron a que estas graves violaciones se cometieran y si existieron o no otras personas involucradas. En el caso concreto, el principal interés que persiguen los familiares del señor William Murat, tiene que ver con la recuperación de sus restos óseos, teniendo en cuenta que según el relato de su hija dicha situación ha imposibilitado elaborar el duelo, manteniendo el impacto a nivel individual y familiar.

Referencias

- 19 comerciantes vs. Colombia, Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia 5 de julio de 2004). Fondo, Reparaciones y Costas.
- Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia (1998). *Informe de 9 de marzo de 1998*.
- Álvarez Londoño, L. F. (2006). Responsabilidad por las violaciones de derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 1 (1), 17-33.
- Ambos, K. (2005). *La parte general del Derecho Penal Internacional. Bases para una elaboración dogmática*. Montevideo, Uruguay: Temis, Dunker y Humblot, y Konrad Adenauer Stiftung.
- Andreu-Guzmán, F. (2008). *Impunidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos*.
- Anzualdo Castro vs. Perú, Serie C, núm. 202, párr. 179 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia de 22 de septiembre de 2009).
- Bayá Camargo, M. (s.f.). El acceso a la justicia como derecho humano.
- Beristáin, C. (2007). Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos. España: Editorial Hegoa.
- Blake vs. Guatemala, supra nota 151, párr. 96 Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Sentencia 22 de enero de 1999).
- Caballero Delgado y Santana, Serie C No. 22, párr. 56 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia de 8 de diciembre, 1995)
- Calderón Gamboa, J. F. (2015). *La Evolución de la "Reparación Integral" en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. D. F, México: Colección Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Recuperado de http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CSIDH_EvolucionReparacionIntegral-1aReimpr.pdf
- Calderón Gamboa, J. F. (2005a). El daño al proyecto de vida. México: Porrúa.

- Calderón Gamboa, J. F. (2005b). *Reparación del daño al proyecto de vida por violaciones a derechos humanos*. D. F, México: Editorial Porrúa. Recuperado de <http://www.corteidh.or.cr/tablas/24484-1.pdf>
- Cantoral Benavides vs. Perú. párr. 58, Reparaciones y Costa.
- Cardona, A. (23 de febrero de 2018). En Colombia 82.998 personas fueron desaparecidas forzosamente. *Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)*. Recuperado de <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/en-colombia-82-998-personas-fueron-desaparecidas-forzosamente>
- Celedón Rivero, J. (2014). Informe pericial psicológico: valoración del daño psíquico sobre un proceso de acción de reparación directa. Recuperado de <https://psicologiajuridica.org/archives/4501>
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). Informe general. Capítulo II - Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado. Recuperado de http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/capitulos/basta-ya-cap2_110-195.pdf
- Centro Internacional para la Justicia Transicional. (2011). *Políticas públicas que hacen justicia: cuatro temas en la agenda de reparación en Colombia*. Bogotá, Colombia: Centro Internacional para la Justicia Transicional.
- Cesti Hurtado vs. Perú, Serie C No. 78, párr. 54 Reparaciones y Costas (Sentencia de 31 de mayo de 2001)
- CERCAPAZ. (2012). Compendio de orientaciones prácticas y aprendizajes de la cooperación entre Estado y Sociedad Civil para el desarrollo de la paz. Bogotá, Colombia: GIZ. Recuperado de https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/_import_publications/COL_Cercapaz_Compendio-de-orientaciones-practicas.pdf
- Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. (2016). Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Bogotá, Colombia: Ediciones desde abajo.
- Constitución Política de Colombia. (1991). Asamblea Nacional Constituyente, Bogotá, Colombia. (6 de Julio de 1991).
- Convención Interamericana de Derechos Humanos. (1969).

- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (s.f). Desaparición forzada. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (6). Recuperado de <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33824.pdf>
- Corte constitucional. (1968). *Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad*.
- Chitay Nech y otros vs. Guatemala, nota 275.
- Díaz Colorado, F. (2008). La justicia transicional y la justicia restaurativa frente a las necesidades de las víctimas. *Umbral Científico*. (12), 117-130. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=304/30401210>
- Durand y Ugarte, supra nota 160, párr. 128 Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. (17 de julio de 1998)
- Faúndez Ledesma, H. (1999). *El sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales*. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
- Federación Internacional por los Derechos Humanos. (2007). Los derechos de las víctimas ante la Corte Penal Internacional: Manual para víctimas, sus representantes legales y ONG. Recuperado de https://www.fidh.org/IMG/pdf/4-manuel_victimes_CH-I_ESP5.pdf
- Fernández Vacas, F. (2015). *El Derecho Internacional ante el Conflicto de Colombia*. Valencia, España: Ed. Tirant lo Blanch.
- Gobernación del Meta. (2016). Análisis cartográfico del posconflicto en el departamento del Meta, reintegración y riesgos de violencia en la puerta del sur colombiano.
- Gobernación del Meta. (2012-2015). *Plan de Acción Territorial para la atención a víctimas del conflicto armado*.
- Godínez Cruz, Serie C No. 5, párr. 182 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia de 20 de enero de 1989)
- González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, p. 160 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia de 16 de noviembre de 2009)
- Gutiérrez Soler vs. Colombia, párrafo 3 voto razonado juez Cançado Trindade (2005).

- Guzmán Rodríguez, D. E., y Prieto Dávila, S. C. (2013). *Acceso a la justicia. Mujeres, conflicto armado y justicia*. Bogotá, Colombia: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.
- Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. párr.159 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia de 1 de marzo de 2005)
- Huber, F. (2007). *La Ley de Justicia y Paz, desafíos y temas de debate*. Bogotá, Colombia: Editorial Gente Nueva.
- International Center for Transitional Justice. (s.f.). *¿Qué es la Justicia Transicional?* Recuperado de <http://ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional>
- Jara Bustos, F. (2013). Fiscalía v. Lubanga Dyilo: la primera sentencia sobre reparaciones de la Corte Penal Internacional. *Anuario de Derechos Humanos*, (9), 113-125.
- Las Palmeras, supra nota 160, párr. 58 Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Ley 1448 de 2011: Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Cong. (10 de junio de 2011)
- Ley 599 de 2000. Cong. Bogotá, Colombia. (24 de julio de 2000)
- Loayza Tamayo vs. Perú, Serie C No. 42, párr. 142 Reparaciones y Costas (Sentencia de 27 de noviembre de 1998)
- Los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. párr. 84 Reparaciones y Costas
- Maldonado, C.E., (2000). *Derechos Humanos, Solidaridad y Subsidiariedad*. Bogotá, Colombia: Temis S.A.
- Masacre de Mapiripán vs Colombia, Corte Interamericana de Derechos Humanos (2005)
- Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Sentencia de 11 de mayo de 2007).
- Meza, A. G. (2010). La responsabilidad del estado por hechos internacionalmente ilícitos: la atribución de un comportamiento al estado y el rol de la corte internacional de justicia. *Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja"*. (5).
- Molteni, A. (1964). La responsabilidad internacional del Estado. Lecciones y Ensayos, 26, 43-63. ISSN: 0024-0079. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. Recuperado de <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/26/la-responsabilidad-internacional-del-estado.pdf>

- Municipio. (s.f). En *Alcaldía de Cabuyaro*. Recuperado en 2017 de <http://www.cabuyaro-meta.gov.co/tema/municipio>
- Nacionalización del paramilitarismo en la zona séptima. Capítulo IV. (s.f). *Colombia nunca más, crímenes de lesa humanidad*. Recuperado de <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z7/ZonaSiete04.html>
- Naciones unidas. (1992). Declaración de Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
- Naciones Unidas. Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado. (2005). *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*. Recuperado de <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx>
- Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2003). *Compilación de Derecho Penal Internacional. El Estatuto de Roma y otros instrumentos de la Corte Penal Internacional*. 394. Bogotá, Colombia: Panamericana Formas e Impresos S.A.
- Olano García, H. (2016). Teoría del Control de Convencionalidad. *Estudios Constitucionales*. 14 (1), 61-94.
- Olasolo, H., y Galain Palermo, P. (2018). *Los desafíos del derecho internacional penal. Atención especial a los casos de Argentina, Colombia, España, México y Uruguay*. Valencia, España: Tirant lo Blanch.
- Presidencia de la República de Colombia. Villagrán Morales y Mack. Corte IDH. Memo Caso Manuel Cepeda contra Colombia. Bogotá.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD. (2010) . Área de paz, desarrollo y reconciliación. *Análisis de la conflictividad*. Meta, Colombia.
- Radilla Pacheco vs. México, Serie C, No. 209 Corte IDH. (Sentencia de 23 de noviembre de 2009)

- Ramelli, A. (2011). *Jurisprudencia Penal Internacional aplicable en Colombia*. Bogotá, Colombia: Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GIZ), Embajada de la República Federal de Alemania y Universidad de Los Andes.
- Resolución 61/177 de 2006. Organización de las Naciones Unidas. (diciembre 20 de 2006)
- Robinson, J. (11 de mayo de 2013). El mayor problema que tiene Colombia es la forma en que funciona el Estado. *Fundación ideas para la paz*. Recuperado de <http://www.ideaspaz.org/publications/posts/538>
- Rojas Báez, J. J. (2008). La jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos en materia de reparaciones y los criterios del proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Recuperado de <http://www.corteidh.or.cr/tablas/R22050.pdf>
- Sentencia. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz. (29 de febrero 2016). Expediente de prueba, folio 43310
- Sentencia. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz. (25 de Julio de 2016).
- Sentencia. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala de Justicia y Paz. Magistrado ponente: Léster M. González R. Radicación: 110012252000201400027. Postulados: Salvatore Mancuso Gómez y otros. (20 de noviembre de 2014).
- Sentencia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Radicado: 45463. M.P. José Luis Barceló Camacho. (25 de noviembre de 2015).
- Sentencia. Sala de Casación Penal. Corte Suprema de Justicia. SP17548-2015. M. Ponente: Patricia Salazar Cuellar. (16 de diciembre de 2015).
- Sentencia. Sala De Justicia Y Paz Tribunal Superior De Bogotá. Magistrada Ponente: Alexandra Valencia Molina. Radicación: 110016000253200782794 N.I. 1357. (15 de julio del 2016).
- Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Bogotá, Sala De Justicia Y Paz. M.P. Léster M. González R. Radicado: 110012252000201400027. Postulados: Salvatore Mancuso Gómez y otros. (20 de noviembre de 2014).
- Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Bogotá, Sala De Justicia Y Paz. M.P. Uldi Teresa Jiménez López. Radicación: 110016000253200680450. Postulados: Guillermo Pérez Álzate y otros. (29 de septiembre de 2014).

- Velásquez Rodríguez, Serie C No. 4, párr. 172 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia de 29 de julio de 1988)
- Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Párr. 155 y 181 Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia de octubre 30 de 2013). En contra del postulado Hebert Veloza García Magistrado Ponente: Eduardo Castellanos Roso.
- Uprimny Yepes, R. (2006). Bloque de constitucionalidad, derechos humanos y proceso penal. Colombia: Imprenta Nacional de Colombia.
- Uprimny Yepes, R., y Saffon, M. (2005). *Justicia transicional y justicia restaurativa: tensiones y complementariedades*. Recuperado de https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_52.pdf
- Uprimny Yepes, R., y Saffon, M. (2006). *Los retos jurídicos de la desaparición forzada: de la lucha por el reconocimiento a la lucha por la eficacia de un crimen atroz*. Recuperado de <https://www.dejusticia.org/los-retos-juridicos-de-la-desaparicion-forzada-de-la-lucha-por-el-reconocimiento-a-la-lucha-por-la-eficacia-de-un-crimen-atroz/>
- Vereda la Esperanza vs. Colombia, Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia de 31 de agosto 2017).
- Werle, G. (2011). *Tratado de Derecho Penal Internacional*. Valencia, España: Tirant lo blanch.
- Woolcott Oyague, O., y Monje Mayorca, D. (2018). El daño al proyecto de vida: Noción, estructura y protección jurídica según los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH. *Utopía y Praxis Latinoamericana*. 23 (2), doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1800842>. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27957770009>

Apéndice

Apéndice 1. Desaparición Forzada Del Señor William Hernando Murat Sánchez, Relato De Su Hija María Del Pilar Murat Martínez. (Transcripciones relatos)

Relato No. 1 – Fecha: 13 de septiembre de 2018.

Mi nombre es María del Pilar Murat Martínez, mi padre es William Hernando Murat Sánchez uno de los muchos desaparecidos en Cabuyaro (Meta), mi padre fue solicitado por alias Gato en la finca La Embajada, el 29 de julio del año 2001, la citación le fue transmitida por Jaime Albarracín era un simple vendedor de pescado del sector, usando simplemente: “dígame al del carrito azul que se acerque a la embajada que ya hablamos con él es para un expreso que no falte”. Jaime ya sabía que gato era un miembro de las AUC, por lo tanto, él se acercó a mi padre con miedo, ellos nunca tuvieron problemas ni nada, pero si eran vecinos, conocidos, entre veredas, es muy pequeño (el municipio).

Mi papá no tenía dinero para el aerocarpati que manejaba ni para hacer los expresos, entonces a las 8 a.m. él cogió la bicicleta, una bicicleta vino tinto y cogió rumbo hacia La Embajada, lo último que dijo a la esposa fue, el que nada debe nada teme, y pues que, si no iba, lo iban a ir a sacar a la casa.

Cuando él llegó allá lo tildaron de auxiliador de la guerrilla, cosa que no es cierta, puesto que mi papá a duras penas los había visto una vez y fue porque los transportó en una sola ocasión, sin embargo, a mi papá, por cosas que yo deduzco viendo el expediente, lo tenían vigilado, no se sabe por qué motivos, porque Gato estaba siempre en un mismo lado a la misma hora, y mi papá lo alcanzó a ver en algunas ocasiones al igual que Jaime.

Después de que mi papá llegó allá, mi tía Ayde y mi abuela Teresa se fueron a indagar sobre el paradero de mi padre ya que habían pasado dos días y no se sabía nada, en cuanto fueron a indagar se dieron cuenta que, le contaron a mi tía que a mi padre lo tuvieron ahí en la finca La embajada y posteriormente, lo llevaron a la escuela La embajada que queda más o menos a 8 km de la finca donde ella estaba, allá lo tuvieron y lo pusieron atrás, lo dejaron atrás de la finca como por cinco horas más o menos.

Después llegaron, estaba Pollo y alias Jimmy quien confesó en el 2011 el crimen, confesó que con un calibre 38 le dio el disparo de gracia a mi papá, cuentan también que Pollo le dijo a Jimmy que lo picara, pero no, Jimmy dijo que no fue capaz, llegaron otros que no recuerdo sus alias, llegaron otros dos armaron un hueco y lo enterraron, justo ahí donde lo mataron lo enterraron.

La búsqueda de mis abuelos, de mi abuela y mi tía indagando, se fueron a Barranca de Upía y buscaron a personas que conocían a mi padre y les preguntaron si en algún momento se habían topado durante ese tiempo que él estaba perdido. Descubrieron también que había un restaurante que queda cruzando de Barranca de Upía a la vereda La Embajada, donde decían que siempre se reunían los paramilitares, cuando se enteran de eso, ellas que están dispuestas a todo por a ir a buscar a los victimarios y que cuenten que pasó.

Mi tía y mi abuela siempre pidieron ayuda a las autoridades y siempre les negaron, en Cabuyaro les negaron el acompañamiento que porque era muy peligroso y que ellos no iban, luego cuando se enteraron que en Barranca de Upía estaba el restaurante, la escuela y eso, ellas quisieron ir a indagar también, y también les negaron el acompañamiento diciéndoles que ellos no iban por allá porque levantaban el avispero que era muy peligroso. Sin embargo mi tía y mi abuela les respondieron que iban a ir, que iban a ir solas y que en caso de que no vayan a aparecer y que no se supiera más de ellas que fueran allá porque ellas iban a estar allá.

Ellas llegaron a la escuela y se encontraron con un señor, el cual lo identifican como alias Pollo Roger, mi tía y mi abuela le dijeron que las dejara ingresar para buscar pistas que les permitiera dar con el hallazgo de mi padre, pero él solo accedió a que entrara mi tía con él y mi abuela se quedó afuera esperando, buscaron, había un lago el cual cuentan que habían pirañas y eso, sin embargo, no estaba la certeza de que lo hayan echado ahí porque según las declaraciones él fue enterrado entonces por ese lado no. Cuarenta y cinco minutos duraron buscando pistas, mi tía. Mi papá siempre llevaba documentos y nada, no se encontró nada, definitivamente infructuoso todo lo que se hizo, después de eso normal, las dejaron ir y hasta ese día no han vuelto a saber nada.

El día que estuvieron en el restaurante mi abuela y mi tía, ya sabían los paramilitares que ellas iban a estar ahí, ¿por qué razón? ni idea, pero ellos sabían que ellas iban a estar ahí. La dueña del restaurante le dijo a Gato que estaban buscando a Pollo, se supone que la última

persona que estuvo con mi papá era él, Gato se quedó con el reloj de mi papá, entonces ellos dos fueron los últimos que estuvieron con mi papá después de Jimmy que le dio el tiro de gracia. Resulta que Pollo le dijo a mi tía y a mi abuela que se fueran que ellas no tenían nada que hacer ahí. Mi abuela y mi tía esperaron como cinco horas y recibieron una llamada al restaurante, en esa llamada solo les dijeron: -no venga a buscar problemas acá no hay nada suyo, y colgaron. Prácticamente amenazadas. Mi tía y mi abuela por otros medios siguieron indagando, pero de una forma más suave, digamos que ya sabían que no podían contar con las autoridades entonces ya por ese lado no. Se fueron donde otros vecinos a indagar, pero nada, ellos por miedo no les decían nada, mi abuela murió en el año 2014, murió de viejita con la esperanza de encontrar a mi padre, en sí, lo último que me dijo mi abuela es que me dejaba esta herencia a mí y a mis hermanas, que nos dejaba esta herencia de la búsqueda.

Referente a las autoridades hemos acudido a Justicia y Paz, Fiscalía, desde el 2003 con la Fundación Ibérica Bautista.

Yo estaba pequeñita, yo tenía cuatro años cuando todo esto ocurrió, vivíamos allá, digamos que la familia se desintegró, se desconformó, unos vinimos a Bogotá y otros están allá, mis hermanos paternos siguen allá, en cambio mi mamá y nosotras nos vinimos para acá (Bogotá). Después de eso, como al año después más o menos, porque sin embargo mi mamá quedó muy sola, desde mi papá mi mamá nunca quiso conocer a otra persona, una mujer muy guerrera mi mamá, a falta de oportunidades, sin embargo, no fue como un bloqueo al progreso que logró darnos a cada una.

Mi papá tuvo dos relaciones libres, sin embargo, no fueron dos relaciones al tiempo, primero fue la relación con la señora con la cual tuvieron tres hijos y después con mi mamá donde nacimos tres chicas, allá son dos chicas y un varón, y acá tres chicas. Mi papá vivía con nosotras cuando ocurrieron los hechos porque se había separado de la señora Leonor. Mi mamá estaba un poco enferma, no actuó tanto referente a la búsqueda de mi padre, también hay conflictos familiares que surgieron referente al nacimiento de nosotras es como que mis abuelos dudaban que él fuera nuestro padre, nos catalogaban como las bastardas, entonces eso si complicó por lo tanto las cosas, y mi mamá estuvo alejada de la búsqueda, sin embargo el dolor, el dolor cada quien sabe cómo es su dolor y de qué forma puede expresar su dolor.

Vereda La Embajada, municipio Cabuyaro, departamento Meta. A mi padre lo llevaron a la escuela, 8 km por Barranca de Upía. Ahí llevaron a mi padre y ahí es donde ocurrieron exactamente los hechos ya del crimen del asesinato de mi padre.

Mi papá era un guerrero, un trabajador como cualquier campesino, él transportaba gente, hacia acarreos, él manejaba un aerocarpati, pero solo lo usaba para eso, sin embargo lo de las AUC, después de matar a mi padre, Jimmy le preguntó a Pollo que por qué habían matado a mi papá, por qué matar a William, por qué me obligó a dar ese tiro matar a William, Pollo le dijo que mi padre supuestamente vendía droga en el municipio. Jimmy en su declaración dice que él nunca había escuchado de mi papá, el trabajo de Jimmy era cobrar vacunas a la gente, según dice mi tía dice que ellos supuestamente no habían citado a mi papá, ellos si citaban a gente, pero con plata y nosotros somos personas muy humildes, personalmente lo veo como no sé, como simple morbo por ver morir a una persona, en realidad no hubo ningún fin.

Mi abuelo materno siempre ha vivido acá en Bogotá, nosotros acudimos a él, muy chiquitas nosotras, él nos dio la mano al principio, luego mi mamá consiguió un trabajo en la alcaldía y logró arrendar una casa para nosotras, digamos que en un tiempo esto no nos afectó puesto que estábamos chiquitas, estábamos estudiando y mi mamá solo se dedicaba como a sacarnos adelante. Después fui creciendo y me fui interesando, ha sido más bien como un impacto horrible, el hecho de no tener imagen paterna, la falta de no tener a mi padre. El primer día de clases, mi fiesta de 15, son cosas que no se pueden llenar, vine a la fundación y desde 2013 me emplearon, y quise empoderarme en la búsqueda de la verdad, yo quiero la verdad, yo quiero un luto, quiero enterrar a mi padre, he tenido sueños muy fuertes, el único recuerdo que tengo de mi padre es una fotografía, yo lo sueño con esa imagen, sin embargo hablando con otras personas me dicen que lo deje descansar en paz, pero a través de mis sueños yo veo que él no está descansando en paz, que no va a descansar en paz porque es que él no pidió estar allá, pero hay un tiempo para todo, él debió morir a mi lado de viejito no de esa forma. Yo quiero esa verdad, quiero encontrar el cuerpo, quiero que toda mi familia de verdad vivamos un luto real porque hemos estado enmascarando el dolor, lo hemos estado mutando que realmente no llenan interiormente. Entonces, digamos que personalmente para llegar a una aceptación, me he acercado a la música, a la lectura, a la poesía, me gusta instruir, duré un tiempo instruyendo a niños de

una banda marcial, niños pequeños, eso es como una motivación interna, acá estoy tocando una realidad que no la toco en otras instancias pero que siempre esta ahí, todo me va a recordar a mi padre, todo lo que hago y que supuestamente me va a permitir estar concentrada en algo diferente, pero todo me recuerda a mi padre a pesar que de no compartí con él, no recuerdo nada, estaba muy niña.

Una vez hubo una prospección en base a la declaración dada por alias Jimmy, pero se hallaron otros cuerpos, de una señora y un señor, sin embargo, no eran los de mi padre. Las autoridades muy negligentes en ese sentido porque siempre la excusa es que no hay recursos para llevar al victimario para que indique, que el terreno que ta ta ta, eso fue hace cuatro años, pero no hay ningún resultado, el caso está inhibitorio. Llevo dos semanas trabajando con mi abogado, estamos trabajando en una demanda para que nos den resultados para ver que han hecho, en principio el poder lo tenían mis abuelos, pero ellos murieron, hasta ahí no se había hecho nada, yo firmé poder hace poco esperando que sea algo fructuoso.

En principio nosotras nos dimos cuenta, nos informaron que podíamos ser reparadas económicamente cuando éramos menores de edad, nos dijeron que tan pronto tuviéramos las cédulas podíamos ir a la unidad y actualizar los datos y que después de eso tendríamos que esperar seis meses, eso fue lo que nos informaron, nos dijeron que para ser reparadas. Hasta el momento no hemos sido reparadas, hasta el momento quienes han sido reparadas han sido la esposa de mi padre y mi hermano mayor William, nosotras no, mi mamá si en algunas ocasiones, en algunas declaraciones mi abuela la nombró, sin embargo, ella no hace parte del núcleo y no ha sido reparada. La verdad no hemos acudido a otras medidas de reparación, sí nos ofrecieron que podríamos domiciliarnos en otro país, en ese momento yo ya estaba grande y decidí que no, eso es huirle a la verdad, si yo me voy a otro país no quiero que el caso de mi papá quede así, por eso no acudimos a esa opción, hemos sido muy pacientes y personalmente creo que fue una buena decisión, si todos se fueran a otro país, ¿dónde queda la verdad?

La postura de mis hermanos paternos, como ellos todavía viven allá es de terror, por eso no indagan, además la situación allá esta pesadísima. Mi hermana me comenta que hace poco estuvieron en una reunión de víctimas, alguien los había citado, alguien de la unidad, me dice mi hermana que cuando se nombró el caso de mi papá alguien salió del lugar, mi

hermana y hermano salieron detrás del señor, con miedo, aunque si se grabaron la cara, pero dicen que él si fue miembro de las AUC en ese tiempo, aunque la postura de ellos si es de temor.

En el caso de mis hermanas ha sido de indiferencia, la única que esta empoderada del caso he sido yo, mis otras hermanas si las mantengo informadas y eso, pero ellas no. Mi hermana melliza también trabajaba acá con nosotros, pero para ella estos temas fueron muy duros y decidió salir por salud mental, mi hermana mayor, ella si nunca ha estado tan metida en el asunto, sin embargo, trata de mantenerse informada, aunque no tenemos mucha comunicación.

El conflicto que había internamente en la familia, sobre nosotras, por eso mi madre decidió alejarnos de la familia de mi padre, después de la muerte de mis abuelos, ya no hay cenas navideñas ni encuentros familiares, la relación de la familia murió con mis abuelos, la relación entre mis hermanos es distante, yo procuro estar en contacto con todos ellos y considero que la relación ente nosotros es muy buena.

Mis hermanos terminaron sus estudios, mi hermano mayor es graduado y trabaja en una petrolera, mi otra hermana tiene un hijo y trabaja en una empresa de bebidas o algo así, mi otra hermana está estudiando, pero no ha terminado y creemos que es por problemas internos de ella.

Según lo que he leído, en el año 2000, un año antes de desaparecer mi padre, los grupos empezaron a meterse, no solo en pequeñas partes del pueblo, sino que arrancaban tierras de la gente, despojaban a la gente de sus tierras y después, justamente como a mediados del 2000 empezaron a desaparecer gente, muchos allá iban engañados con promesas de trabajo, digamos que ese el modus operandi en ese tiempo, engañarlos de esa forma. Si era como decían, que llamaban solo a los que tenían dinero, mi hermano alcanzó a jugar futbol con los victimarios, incluso pudo ser con los que asesinaron a mi padre, ellos se hacían amigos de la gente y luego como se dice los apuñalaban por la espalda, algo así, se ganaban la confianza de una familia y al tiempo se enteraban que era miembro de las AUC, y que pudieron asesinar al vecino. Algunos de los miembros de la AUC eran de allá, incluso la finca donde asesinaron a mi papá la había arrebatado alias Gato a un señor que se llama Don Emilio, él tuvo que salir porque si no lo mataban.

En Justicia y Paz (2011) solo está José Ernesto, alias Jimmy, él declaró los hechos y se acogió a la sentencia anticipada, él ya cumplió su condena, ahorita yo quisiera como buscarlo. He preguntado en la fiscalía pero no he conseguido el contacto, creo que es mi objetivo, alias Jimmy está libre en este momento, el que dio la orden no se acogió a Justicia y Paz pero creo que está en una cárcel del Tolima, pero no lo tengo claro.

Yo terminé hace 3 años mi bachillerato, tengo un técnico en contaduría y estoy cursando un técnico en recreación y deportes, acá trabajo hace un año y medio ya va a ser.

Solo hemos acudido a Justicia y Paz, también tuvimos el apoyo de la Fundación familiares por Colombia, pero por falta de recursos actualmente se desintegró, los casos que ellos llevaban nos los cedieron a nosotros y estamos trabajando en un informe para la comisión de la verdad.

Llevo dos años independiente de mi mamá, acá estoy aprendiendo, quiero acceder a una universidad, pero no hay recursos para acceder, a mi madre le parece chévere que este acá porque es un aprendizaje, pero aun así teme porque ahorita a los líderes sociales los están asesinando, entonces mi mamá teme que esté en el entorno. Soy amante a las marchas, a las denuncias públicas, mi mamá teme y que en cualquier momento algo me puede pasar, aunque la Fundación acá es muy anónima, pero es algo complicado porque en cualquier momento pueden atentar no solo con esta organización sino también con otras organizaciones que trabajan este tema.

No hay una satisfacción teniendo en cuenta que el proceso está detenido, digamos que yo ahorita puedo estar impulsándolo con la demanda, pero en cualquier momento lo detienen, porque Jimmy ya cumplió su condena y no saben dónde están. Es que mi papá no fue el único, dicen que él fue enterrado con otra persona, pero no van más profundo, no hay resultados de nada, digamos que no lo mueven, no hay una respuesta que al menos de una esperanza, teniendo todos los medios para hacerlo no lo hacen, yo digo que ellos tampoco se proyectan, no hacen un análisis claro, ellos también esperan que las familias hagan todo lo que ellos tienen que hacer. Recuerdo que en una ocasión le dijeron a mi tía en la fiscalía, tráiganos más información, como quiere que busquemos sino nos trae más información, cómo voy a ir, mi tía lo único que supo responder fue que eso le correspondía a él, porque ella temía por su vida y que el deber de él era proteger la vida, no sé, no hay nada fructuoso, con las entidades todo ha sido muy carente de posibilidades, y aparte los nexos

que ellos tienen con las autodefensas, ojalá yo pudiera decir quien tiene nexos con quien y que se pudiera hacer algo al respecto, sin embargo uno es minúsculo para ellos, uno no es nada.

A Jimmy lo citaron porque mi tía sí tenía claro quién era, cuando lo estaban judicializando llegó mi tía e informó que él tenía responsabilidad en el crimen contra mi familia, fue voluntario, él se declaró en sentencia anticipada, él lo hizo creo yo que fue por el beneficio, él acepto los cargos del crimen de mi padre por la denuncia de mi tía. Sobre el lugar donde enterraron a mi padre, él cuenta que fue en medio de unos árboles, dice que el hueco es pando 2 metros de profundidad, cualquiera que se acerque ya lo pudo haber encontrado, sin embargo, ahí es donde yo veo como la falta de voluntad del Estado para ir a hacer esa prospección.

No han hecho la búsqueda clara de solo mi papá, uno entiende que son muchos casos, sin embargo, hay muchas personas trabajando y si tuvieran una mejor organización de sus labores, a mi padre y a muchos ya los hubieran encontrado, si de verdad les importara. Algo que debería hacerse es una recolección de ADN por zonas, que eso se puede. Recuerdo que en una conferencia ellos dijeron que lo habían hecho, pero eso nunca lo han hecho, es como solo para decirlo ante los medios, pero eso nunca lo han hecho, si de verdad lo hubieran hecho la mayoría de los NNs que están en el CTI ya habrían encontrado a sus familiares, digamos que es falta de voluntad, como que no, no quieren, les da pereza, no me explico, es que no me explico.

A mi abuelo y a mi abuela fueron los únicos que les tomaron muestras, yo quisiera solicitar también que nos tomaran muestras a mí y a mis hermanos, como una actualización, creo que eso ayudaría.

Si hay una esperanza, igual eso tiene una finalidad, de algo tiene que servir, sin embargo, bueno, por el lado de la presidencia definitivamente yo creo que en cualquier momento eso se puede caer y ya, entonces digamos que las expectativas están como así, como que a veces sí, uno se proyecta a que esto si puede funcionar, pero no sé.

Relato No. 2 – Fecha: 29 de junio de 2019.

No nos quieren informar bien sobre la situación del sindicato, de Jimmy, digamos que ese tema como que no lo tocan, la vez pasada hablando con la abogada, presentamos un

derecho de petición para que nos informaran la ubicación de él, lo que sabemos es que está en Casanare y que vive con su familia. Digamos que profundizar esa parte como que es muy difícil porque estaba muy pequeña.

Una entrevista en Justicia en Paz, porque no conocían el testimonio del otro núcleo familiar. Lo que está pendiente en ese sentido es el testimonio de mi hermana mayor, pero resulta que ahí sí veo una negligencia tenaz por parte del fiscal porque él no lanzó una citación a mi hermana, yo dejé datos de contacto, yo hice todo lo que está a mi alcance, para que mi hermana mayor acudiera a rendir declaración, lo que pasa es que ella vive en Girardot y necesita eso para un permiso del trabajo, entonces digamos que eso no me ha gustado mucho de ese fiscal. Antes estaba con el fiscal 135 y ahora con el fiscal 144, que a la vez no mueve nada, y todo sigue igual.

En cuanto a las reparaciones hubo una indemnización a mi hermano, cumplimos los 18, nos llamaron, se comunicaron conmigo, porque cuando me vinculé a la Fundación de una firmé el poder a la abogada para tener la representación civil en el caso, enviamos las actualizaciones de los documentos. También lo que acredita a la señora Leonor como esposa legal de mi papá, también agregue unas declaraciones de terceros que me fueron solicitadas y ya, eso durante tres días, a los dos días me respondieron el correo diciendo que los papeles están correctos, algo así y ya, hasta ahí no he vuelto a saber nada, la comunicación con el encargado de mi caso en la unidad es nula.

Mi papá y mi mamá no estaban casados, simplemente mi papá y mi mamá se gustaron, mi papá estaba casado, yo tenía cuatro años, yo no lo recuerdo, pero lo que dice mi mamá es que mi papá aportaba todo, no teníamos casa propia, no puedo decir que mi papá nos compró vivienda, pero eran los planes, eran las proyecciones, en ese entonces nosotras vivíamos con mi abuelo, el papá de mi mamá, y mi papá con su papás a lado de la casa de mi abuelo. En cuanto a lo económico era lo único que tenía mi mamá, aparte mi mamá tiene un hijo con otro señor que vive en Estados Unidos, tiene una demanda por alimentos porque él nunca le aportó nada a mi hermano, mi papá fue a cobijarlo a él como si fuera propio, eso es muy importante recordar, pues porque llena y mi hermano lo recuerda como su papá, como el papá que estuvo ahí presente.

Después de que él desapareció mi mamá tuvo que empezar a trabajar para sostenernos, mi mamá no sabía hacer mucho, pero consiguió un empleo con el Estado haciendo oficios

varios, trabajó en Idiprom. Nos cuida mi abuela, digamos que mala vida no, vivíamos con lo necesario y estábamos felices, pero a la vez se sentía como el vacío, siempre va a estar ahí como el huequito, y ahora que crecimos es más bien las incógnitas, es más bien el por qué, como despertar, como ya entrar a este mundo a preguntarse, yo por qué tuve que pasar tantas cosas, mi mamá nos llevaba a vivir de un lado a otro, porque no era estable, no ganaba muy bien tampoco, porque era un salario mínimo, vivíamos con mi abuela, entonces ella tenía cinco bocas que alimentar, sola, completamente sola.

Mi abuelo Elías, cuando mi papá desapareció nos empezó a aportar solo 100.000 por las tres, por los cuatro prácticamente con mi hermano.

Lo que hemos obtenido, el apoyo psicosocial, por ejemplo, lo hemos obtenido es acá, en la Fundación, la Fundación también nos tocaba a veces recurrir a la Fundación por cuestiones económicas ya que mi mamá no daba más.

Nos tocaba recurrir a la Fundación en tiempos así reduros que mi mami definitivamente no daba, más o menos en el año... no recuerdo, creo que fue el 14 o 13, que mi hermano con mi mamá empezaron a hacer los papeles para obtener una vivienda propia, pues eso se dio, se dio un año después y fue una alegría pues tremenda. Estuvimos a punto de perder la casa porque no teníamos para la cuota y entonces mi hermano murió, y él era uno de los propietarios así la deuda quedó a salvo, es algo triste, no sabemos si es algo triste, no nos explicamos, tal vez era su misión dejarnos bien, porque ahí se ve como el cambio de roles, mi hermano empezó a ser nuestro papá, mi papá fue el papá de él, mi papá desapareció y ahora mi hermano empezó como a adquirir esa responsabilidad de protegernos y mi mamá pues obvio, mamá y papá.

Mi abuelo es muy amigo de un señor que se llama José Villamil, el señor José Villamil, acá también tenemos el caso de él, yo creo que más fue por medio de él, aparte que fueron casi en el mismo sitio las desapariciones, entonces, pero fue en un tiempo distinto, desde que yo tengo 12 años prácticamente, tenemos el apoyo de la Fundación, la Fundación nos ha aportado kit escolares durante dos años nos aportó, la Fundación es como todo.

Yo percibo que ellas, bueno mi hermana mayor por ejemplo, que fue la que más alcanzo a convivir con él..., digamos que medio vacías, las tres se nos puede percibir el huequito como bueno y un papá, porque hay situaciones especiales en las que él debió haber estado, que la fiestica de 15, que el primer día de colegio, que los cumpleaños, que las navidades,

pues digamos que esos momentos no son muy gratos, dejaron de ser gratos, y mueren mis abuelos, pues peor.

Mi hermana María José que es mi melliza, ella siempre ha tenido como... no sé si después de eso, o después ya de entrar en razón, como, bueno, acá falta alguien, problemas como de aprendizaje, y problemas..., es muy dispersa, es muy muy dispersa, y mira que ella no llora, ella puede estar pasando por una situación crítica y mira que ella no llora, yo en cambio soy la parte contraria, yo si lloro, yo soy muy chillona, y yo lloro y no puedo detenerme.

Mi mamá sí creo que es la que más daño tiene, porque a ella le fue impedido participar en la búsqueda, entonces también hizo como que ella le cogiera mucha rabia a mi abuela Teresa, pero no era una rabia así como de "yo no veo a esa vieja" no, porque al final nos brindaban la mano, porque ella necesitaba participar en la búsqueda, no importa que no se hubieran casado con mi papá, pero eso no importa, era la persona que ella quería.

Hace poco tuve un encuentro muy interesante y feo a la vez con mi tía, la hermana de mi papá, y hay mucho..., yo siento que hay mucha rabia, ella le echa la culpa a mi mamá, a la familia de mi mamá, de hecho sacó el comentario de que mi tía, la hermana de mi mamá se había casado con un paramilitar, pues yo ahí de una me defendí, le dije: -¿de dónde saca usted esas acusaciones?, eso es muy grave, y si hubiera sido culpa de mi familia porque no buscó a mi familia primero, ahí usted hubiera empezado la búsqueda, así sea por contactos que hubiera tenido mi tío, que es falso. Entonces, eso por dentro me creó como una sensación de impotencia, fue horrible porque mi tío, yo viajaba arto de chiquita allá y me vio crecer, y es un tío muy amoroso, y entonces yo empecé como a imaginarme tal vez no puedo creer que él de pronto haya matado a alguien o haya extorsionado gente, así que no, definitivamente no. Lo que yo percibo en mi tía es mucha rabia, mucho rencor, ese ha sido como el daño individual de ella, mi abuela antes de morir, que murió de viejita, tuvo una muerte muy digna gracias a Dios, le pidió muchas disculpas a mi mamá, por tanto, por todo lo que la hizo pasar. Y entonces, pues bueno, porque ella me contó muchas cosas de la vida personal de mi papá y mi mamá, que al final no me interesaba saber, sin embargo, eso me hizo darme cuenta de cómo son en realidad o lo que ha cambiado, duele, pero hay que culpar sino al culpable, solo al culpable, entonces eso de que nos echara la culpa, porque yo lo sentí muy propio, porque es la familia de mi mamá.

Estar acá en la Fundación me ha llevado a no pensar solo en mí, yo desde que estoy en la Fundación me ha encantado mucho generalizar, y es muy importante, porque es algo que nos ha marcado a todos, yo diría que ojalá después de que..., estas entidades tienen un tiempo, ojalá puedan ampliar ese tiempo, porque yo no veo que hayan las garantías del que puedan brindarle esa verdad a todas las víctimas.

Ahorita por ejemplo van a realizar unos encuentros, que me pareció tenaz que nos dijeran, que nos hicieran esta pregunta, como, qué opinan si los victimarios están con ustedes como público también dentro de esos encuentros, o sea me pareció muy mal, porque el espacio es nuestro, el espacio es para nosotros, aparte los riesgos que se corren ahí, sería tremendo, y digamos que tal yo me encontrara a Jimmy, por ejemplo.

Digamos que sí debe haber un espacio de reconciliación, digamos que es muy muy importante reconciliarnos, sin embargo, es que el daño está hecho y los sentimientos no..., imagínate parar de sentir, vale lo disculpo, pero al final, uno no va a quedar satisfecho disculpando a una persona que le dañó su estructura familiar, el amor, que le quitó el amor, porque a mí me quitaron el amor de mi papá, fuera de eso la tranquilidad de mi familia, el estar pensando mi mamá, es que yo. Mi mamá es una guerrera definitivamente, porque ella pensaba todos los días en qué les voy a dar de comer, a nosotras nos tocó fue ayudarla, nosotras estábamos estudiando, colegio público normal, estrato dos, pues nosotros nos tocó ir a pedir comida en las panaderías, en los lichigos, pues de alguna forma teníamos que ayudar a que mi mamá se sintiera mejor, mi mamá estaba muy agobiada en verdad, después muere mi hermano entonces fue como el golpe, de hecho pensamos que mi mamá se iba a morir, definitivamente.

Yo me imagino que mi vida, o la vida de mi familia, mi mamá, hubiéramos tenido una casa antes de tener que recorrer todos los barrios de Bogotá para poder vivir, hubiéramos tenido una estabilidad de vivienda, una estabilidad económica, educación superior ya no tan tarde, hasta ahorita yo voy a empezar mi educación en universidad, pero si él hubiera estado es fijo que yo hubiera podido ingresar antes. Digamos que lo mío no era falta de iniciativa, porque el que quiere estudiar estudia, pero las necesidades son algo que no dan espera, entonces yo pensaba, ayudar a mi mamá. Los recuerdos, como esa fiesta de quince, esas cosas que son motivadoras para todas, para la mamá, para la tía, ¡ay! que la niña va a cumplir 15, eso no se ve todos los días, esa clase de cosas, las navidades, la ropa, yo varias

veces andar con zapatos rotos, definitivamente rotos, casi descalzas, nosotras, eso no se hubiera visto, no tendría esas imágenes del... señora tiene pan viejo que me pueda regalar, sino tendría un recuerdo bonito de un desayuno en familia de calidad. Es que es un daño tremendo, es un vacío que nada lo va a reemplazar.

Apéndice 2. Lista de siglas y abreviaturas

AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
CADH	Convención Americana sobre Derechos Humanos
CIJ	Corte Internacional de Justicia
CNMH	Centro Nacional de Memoria Histórica
CPI	Corte Penal Internacional
DDHH	Derechos Humanos
DIH	Derecho Internacional Humanitario
DIDH	Derecho Internacional de los Derechos Humanos
DPI	Derecho Penal Internacional
EPL	Ejército Popular de Liberación
ELN	Ejército de Liberación Nacional
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FIDH	Federación Internacional por los Derechos Humanos.
ONGs	Organizaciones No Gubernamentales
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PAN	Partido de Acción Nacional
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos
TPIR	Tribunal Penal Internacional para Ruanda
UNIR	Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria

Apéndice 3. Consentimiento informado

**UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
DIVISIÓN DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
MAESTRÍA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO ANTE ORGANISMOS, TRIBUNALES Y
CORTES INTERNACIONALES
BOGOTÁ D.C.**

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTE DE INVESTIGACIÓN

Fecha: 13 de Septiembre de 2018
Lugar: Fundación Nidia Cruz Baulista, Carrera 20 # 35-45
Hora: 9:30 a.m.

Yo, Maria del Pilar Murad Martinez, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1073711379, expedida en Soacha, mayor de edad y en pleno uso de mis facultades, autorizo a Luis Carlos Martínez Moreno, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.195.369, expedida en Colón (Putumayo) y estudiante de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales, para realizar Entrevista en el marco de la Línea de Investigación de Crímenes Internacionales, la cual está orientada a la búsqueda y procesamiento de información sobre graves violaciones de derechos humanos a través de la sistematización de diversas fuentes, que permitirá la construcción de un texto teniendo como eje central mi relato, el cual será recogido a través de una grabación.

Las manifestaciones realizadas por mí serán utilizadas de manera escrita con fines académicos para el desarrollo de la investigación, bajo la observancia de la dignidad humana, el respeto y la voluntariedad. La información obtenida de mí no será usada para ningún otro propósito distinto a la investigación.

Manifiesto que he aceptado voluntariamente, que he comprendido los fines y naturaleza de la entrevista, mi rol como participante y que reconozco el uso y la difusión que tendrá la información obtenida. Este documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad y han sido aclarados previamente todos mis interrogantes acerca del uso y difusión de la información en la investigación y los objetivos de la misma.

En constancia de lo anterior, firma:

Maria del Pilar Murad M.

Nombre: Maria del Pilar Murad M.

C.C. Nro. 1073711379, expedida en Soacha